

CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTORICOS

Origen:

La extradición es una institución jurídica que propiamente aparece en el siglo XVIII. La palabra extradición y sus equivalentes en otros idiomas es originaria del derecho francés, del Tratado celebrado entre Francia y Wurtemberg.

La expresión extradición como se le conoce actualmente es de uso relativamente reciente, el término apareció por primera vez en el Decreto de la Convención Francesa del 19 de febrero de 1791, esto no significa que no existiesen para entonces procedimientos similares a la extradición, en general la práctica se originó en las antiguas civilizaciones no occidentales siendo la entrega del delincuente mas que un procedimiento formal una expresión de amistad y cooperación entre soberanos.

En la antigüedad se hayan ejemplos de extradición pero como casos aislados, que ninguna semejanza ofrecen con el ejercicio regular de un derecho, por que en diversas oportunidades la extradición se obtuvo por la violencia o la corrupción; en el caso de las tribus de Israel, éstas se impusieron tumultuariamente a la tribu de Benjamín para que les entregase a los hombres que se habían refugiado en Guibea después de haber cometido un crimen en Israel. Esta referencia se encuentra en el Capítulo XX del Libro de los Jueces, y trata sobre la venganza que tomaron las once tribus de Israel contra la de Benjamín por negarse a entregar a vecinos de Guibea que habían ocasionado la muerte de la concubina de un levita, al haber abusado repetidamente de ésta.

En el Capítulo XIX se menciona a un levita que fue a buscar a su concubina y al retornar con ella debió pernoctar en Guibea. Es invitado por un anciano quien le ofrece su hospitalidad. Luego de esto vecinos de Guibea le piden que lo haga salir de su casa para matarlo. Buscando salvar su hospitalidad, el anciano se vio obligado a entregar a la concubina del levita, mujer a la que violan y le causan la muerte. El levita partió a la mujer en doce trozos y los mandó por todo el territorio de Israel. Cuando todos los israelitas se reunieron el levita tomó la palabra y les pidió que tomaran una resolución. Las tribus de Israel pidieron la entrega: ¿Qué crimen es este que se ha cometido entre ustedes? Entréguenos, pues, a esa gente, a esos malvados de Guibea, para que los matemos y desaparezca el mal de Israel, pero los benjaminitas no quisieron hacer caso a sus hermanos israelitas.

Básicamente, no se trataba de reos del derecho común, sino de infractores a las normas fundamentales de convivencia tribal, que eran reclamados por su comunidad de origen para no dejar impune la violación que habían cometido y cuyo requerimiento por lo general, implicaba una amenaza de guerra, en el caso de que la comunidad diera refugio o negara la entrega.

El Tratado de Paz celebrado entre Ramsés II de Egipto y Hattusil III –Rey de los Hititas- de 1280 A.C. es el documento diplomático más antiguo de la humanidad. Este documento

escrito en jeroglíficos está grabado en el templo de Ammon, en Karnak. La historia refiere que este Tratado en lengua acadia y egipcia que puso fin a las hostilidades entre dos pueblos. En este Tratado ambos soberanos se comprometían a entregarse recíprocamente los delincuentes súbditos del Estado Peticionario y éste se comprometía a tratar con indulgencia a los entregados. Un artículo de ese Tratado señalaba "(...) Tanto ellos como sus bienes, mujeres, hijos y sirvientes deberán ser devueltos completamente intactos. No hay que ajusticiarlos, ni dañar sus ojos, sus bocas o sus pies".

Roma:

En el caso de Roma, ésta conoció una especie de práctica de extradición por la cual pedía la entrega de ciertos delincuentes, romano o extranjero, con la salvedad de que la exigencia iba acompañada de una suerte de declaratoria de guerra por considerar el Estado que la no entrega significaba protección del delincuente y por consiguiente complicidad con el ultraje. Por esta razón no se le consideró propiamente extradición (falta de cooperación soberana y libre) explicándose la conducta por cuanto en la Ley XVII Libro L Título VII del Digesto se disponía que el individuo que ofendiese a un Embajador debía ser prestado al Estado al que pertenecía el Embajador Ofendido. Este hecho no tiene carácter de extradición ya que se trata más bien de una de las aplicaciones de la regla según la cual el señor responsable de los delitos cometidos por su esclavo puede librarse de responsabilidad entregándolo a la parte ofendida

Edad Media:

En la edad media el derecho de asilo dificultó la extradición durante muchos siglos. La Edad Media no fue mucho más favorable a la extradición que la Edad Antigua, más por otras razones. En la antigüedad se conoció y practicó el derecho de asilo sagrado, pero no el derecho de asilo territorial fundado en el principio de la soberanía, sin embargo encuentran Convenios citando el de Licardo, Príncipe de Benevento con los magistrados de Nápoles en el año 836, Venecia y el Emperador Lotario de 840 y el de Federico II y Venecia de 1220.

La Edad Media se caracterizó por el desprecio de los derechos individuales, por soberanos despóticos; la soberanía reside en el monarca, el Estado es el Rey y las relaciones internacionales se resuelven en guerras continuas. Esta época se caracterizó por la supremacía internacional del pontificado mediante la potestad espiritual y el poder temporal, en realidad los primeros convenios fueron en interés exclusivo de los soberanos, citando además el celebrado en 1174 entre el Rey de Inglaterra Enrique II y Guillermo de Escocia en el que se "estipulaba la entrega de los individuos culpables de felonía que fuesen a refugiarse en uno u otro país". Aun cuando existan otros antecedentes como los ya

glosados, no se les concede el carácter de extradición por cuanto tuvieron como causa intereses particulares (enemigos personales del soberano).

La Convención del 4 de marzo de 1376 entre Carlos V –Rey de Francia y la Corte de Saboya es un verdadero tratado internacional que tenía por objeto impedir que los acusados de delitos de derecho común fuesen desde Francia a refugiarse en el Delfinado o en Saboya, y recíprocamente.

En 1360 se reconoce el Tratado celebrado entre Pedro I Rey de Castilla y el Rey de Portugal con el fin de entrega recíproca de varios caballeros condenados a muerte y que se habían refugiado en ambos reinos. En 1499 los Reyes Católicos y el Rey de Portugal celebraron un tratado para la entrega de delincuentes que mataren con ballesta o con fines de robo y salteadores de camino. En 1569 Felipe II celebró otro Tratado relativo a los delitos de lesa majestad, robo y hurto, rapto, homicidio ejecutado con ballesta, Arcabuz y escopeta y quebrantamiento de cárcel. En los siglos XVII y XVIII el objeto de la extradición fueron los delitos políticos puesto que eran tiempos de absolutismo y los gobiernos consideraban a los reos políticos como los más peligrosos delincuentes. Por tanto las primeras extradiciones fueron ejecutadas contra aquellos que más tarde, en el siglo XIX habían de ser exceptuados de la entrega. En 1765 Carlos III Rey de España celebró un Acuerdo con el Rey de Francia referente a los delitos de robo en caminos reales e iglesias, robos con fracturas en lugares habitados, asesinatos, incendios, envenenamientos, estupros y falsificación de moneda. En él se disponía la entrega de los delincuentes aun cuando se hubieran refugiado en iglesia o en cualquier asilo privilegiado; pero en este caso no se les podía imponer pena de muerte. Cabe destacar que es importante esta referencia porque es un antecedente para los pedidos contemporáneos de sustitución de la pena de muerte como condición previa a la concesión de la extradición.

La Revolución Francesa:

La Revolución Francesa (finales del siglo XVIII) trae consigo el reconocimiento de los derechos del hombre frente absolutismo monárquico. La revolución Francesa vino a sentar las bases del moderno Estado de Derecho Republicano y, con ello, toda la ideología iluminista, liberal en lo económico y humanista en lo político, y pone en el centro de discusión los derechos del hombre. El nuevo enfoque planteó la necesidad de deslindar la persecución política y la persecución por delito común. La revolución liberal en su lucha contra los poderes del absolutismo cambió el concepto del delito de lesa majestad que era el más grave de todos, para considerar al delincuente político como el que delinque por impulsos nobles y altruistas pugnando por un mundo mejor donde se reconozcan los derechos del hombre, esto es, el ciudadano que se enfrenta al absolutismo por la libertad y la democracia.

Para el pensamiento liberal el delincuente político no era un verdadero criminal sino un ser totalmente inocuo desde el punto de vista de la peligrosidad social y su conducta fue valorada como un comportamiento perfectamente lícito y honroso en virtud de los ideales a los que servía; esto tendría como repercusión, que la legislación liberal tratase con especial

lenidad no exenta de consideración el fenómeno de la delincuencia política, protegiendo al perseguido político mediante la concesión del derecho de asilo (aspecto positivo) y la consiguiente denegación de su extradición (aspecto negativo).

La Edad Contemporánea:

La Edad Contemporánea, trae como consecuencia una nueva visión del derecho internacional, que se va a caracterizar, entre otros, por la universalidad, en oposición al regionalismo y por la codificación de los principios de derecho internacional. Los países de América Latina tienen el enorme mérito de haber sido los pioneros en el proceso de integración jurídica a través de la codificación en el derecho internacional privado. El 23 de enero de 1889 durante el Congreso Internacional Sudamericano de Montevideo se suscribió el Tratado de Derecho Penal Internacional, que a diferencia de la época ya consideraba el criterio de la pena mínima en lugar del listado de delitos.

El 18 de julio de 1911 durante el Congreso Bolivariano de Caracas se suscribió el Acuerdo sobre Extradición. Este Acuerdo fue reemplazado en la práctica por el Código Bustamante al haber participado en éste la mayoría de sus firmantes, a excepción de Colombia. El Acuerdo sobre Extradición curiosamente retoma el principio del listado de delitos con posibilidad de ser materia de extradición. La Convención de Derecho Internacional Privado de la Habana, del 20 de febrero de 1928 elaboró el Código de Derecho Internacional Privado que se conoce como "Código Bustamante" en honor a don Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, internacionalista cubano.

De reciente data es el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, de Río de Janeiro de 10 de diciembre de 1998. Ese instrumento incluye como límite a la extradición que el Estado Requirente no aplicará al extraditado, en ningún caso la pena de muerte o la pena privativa de libertad a perpetuidad.

En este caso el Estado Requirente debe comprometerse a aplicar la pena máxima admitida en la ley penal de Estado Requerido. En la actualidad, la internacionalización de la delincuencia, la complejidad de las nuevas figuras delictivas y el apremio de una mayor coordinación entre los Estados han incentivado como así lo expresa un documento de las Naciones Unidas al estudio de la conveniencia de concertar convenciones multilaterales. Muestra de estos esfuerzos multilaterales son la Convención Única sobre Estupefacientes de Nueva York del 30 de marzo de 1961 y su Protocolo de Enmienda de Ginebra de 25 de marzo de 1972, la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional de Washington del 02 de febrero de 1971, así como la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de Viena del 19 de diciembre de 1988.

Otras convenciones multilaterales con disposiciones análogas son el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves de 1970, el Convenio para la represión de

actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil de Montreal, la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexas cuando éstos tengan trascendencia internacional de 1971, la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos de 1973, la Convención Internacional contra la toma de

rehenes de 1979, el Convenio de la Organización Marítima Internacional para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988, La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Belem do Pará) de 1994, La Convención Interamericana contra la corrupción de 1996, la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados de 1997, el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas de 1997, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del terrorismo de 2000, los Protocolos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la Participación de Niños en Conflicto Armados, Venta de Niños, Prostitución Infantil y Utilización de Niños en Pornografía del 2000. No obstante, el proceso de concertación de un instrumento multilateral es dificultoso resultando por ello una nueva tendencia mucho más fácil de negociar como lo son los Acuerdos Regionales. En esta tendencia encontramos el Convenio Europeo sobre Extradición y sus Protocolos Adicionales, la Convención Europea para la Represión del Terrorismo, Acuerdo de Extradición aprobado por el Consejo de la Liga de los Estados Árabes de 14 de setiembre de 1952, Convención General sobre Cooperación en Asuntos Jurídicos de la Organización Común Africana y Malgache, Tratados Subregionales Centroamericanos sobre extradición de 1907 y 1934 (Convención Centroamericana sobre extradición), además de los acuerdos sudamericanos ya detallados anteriormente.

CAPITULO II

NATURALEZA Y FUNDAMENTO JURÍDICO

Naturaleza:

Referente a la naturaleza de la extradición se ha librado una ardua discusión. Al preguntarse por la naturaleza se trata de responder a la pregunta ¿qué es en esencia?, o ¿cuál es el rasgo fundamental de esta institución? Existen enfoques generales que, como el de Jiménez de Asúa, basado en Franz von Liszt la ven como "un acto de asistencia jurídica internacional" criterio por cierto muy difundido. Pero otros puntos de vista, quizá mucho más técnicos, señalan la naturaleza eminentemente normativa de la extradición. Esa percepción lleva a tener como fuentes de extradición los tratados, las leyes y, aún ahí donde se reconoce fuerza de derecho positivo, las costumbres y la reciprocidad, trasladándose la discusión al terreno de si la materia extradicional es Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, parte del Derecho Internacional Público o bien una rama del Derecho totalmente autónoma e independiente, el llamado Derecho Extradicional. De todo ese debate lo importante es tener claro que el instituto de la extradición es en efecto normativo.

Su presencia es posible gracias al derecho positivo vigente y su regulación se encuentra en los convenios y tratados internacionales, tanto como en las constituciones y leyes internas de cada nación moderna.

Fundamento:

Si al preguntarnos por la naturaleza de la extradición estamos tratando de responder ¿Qué es esta institución?; la pregunta sobre su fundamento pretende contestar su justificación, ¿por qué existe la extradición?. Han quedado atrás los criterios moralistas que creyeron ver en la extradición un deber ético de un Estado para con otro en la entrega de los fugitivos por delitos importantes y la mayoría de los autores se inclinan por señalar el carácter eminentemente práctico de este instituto, así, Jiménez de Asúa apunta: **"En puridad, deben aunarse en los fundamentos de la extradición la base jurídica del auxilio internacional -que es su esencia- y los motivos de índole práctica"**.

Esos motivos prácticos se concretan en la necesidad de no dejar impunes crímenes de cierta importancia y en llevar obligadamente a los responsables a rendir cuentas a un proceso en marcha o a enfrentar las decisiones tomadas en uno ya concluido. Fenech sintetiza estos conceptos de la siguiente manera:

"El fundamento de esta institución radica en la comunidad de intereses de todos los Estados para asegurar la persecución de los delitos poniendo los imputados que se hallaren en sus respectivos territorios a disposición de los titulares penales de los órganos de la jurisdicción de otros Estados, siempre que concurran los presupuestos que lo hacen admisible y eficaz, y que se consignan en los tratados o en el derecho consuetudinario".

CAPITULO III

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA EXTRADICIÓN EN VENEZUELA

1. Principio relativos al hecho punible.
 - 1.1. Principio de la doble incriminación
 - 1.2. Principio de la minima gravedad del hecho
 - 1.3. Principio de la especialidad
 - 1.4. Priincipio de no entrega por delitos politicos
2. Principio reltivos a las personas:
 - 2.1. Principio de la no entrega de los nacionales.
3. Principio relativos a la acción penal, a la pena y a cumplimiento de otros requisitos procesales.

Para conceder la extradición, la autoridad competente deberá verificar si la solicitud cumple con los extremos exigidos por la doctrina y la práctica internacionales que rigen la materia. Al respecto, es preciso mencionar las reglas o principios que son aplicables en el ordenamiento jurídico venezolano:

1. PRINCIPIO RELATIVOS AL HECHO PUNIBLE.

1.1. Principio de la doble incriminación:

De acuerdo a este principio el hecho que da lugar a la solicitud de extradición, debe ser constitutivo de un

delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido. Tal principio se establece en el artículo 6 de nuestro Código Penal Venezolano, en el cual se señala que:

“la extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado como delito por la ley venezolana”.
Negritas y cursivas nuestra.

Esta disposición guarda relación con el numeral 6 del artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, según el cual:

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

(omissis)

Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u prohibiciones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes”.

Este principio se encuentra consagrado expresamente en los siguientes tratados, para mencionar algunos: Código Bustamante, artículo 353, Tratado Bolivariano, artículo 8, Tratado entre Venezuela y Cuba, artículo VIII. Convención Interamericana sobre extradición, artículo 3; Tratado entre Venezuela y España, artículo 2, numeral 1.

Es importante recalcar que el mencionado principio exige que los tipos por los que se solicita la extradición sean similares en ambas legislaciones, lo que supone una identidad sustancial, sin que se tome en cuenta las circunstancias modificativa del hecho o su denominación en cada una de las legislaciones.

1.2 Principio de la minima gravedad del hecho:

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 eiusdem, solo se concede la extradición por delitos no por faltas y con relación a aque-llos se suele establecer en los tratados la pena minima que debe tener asignada el delito para que se proceda a la extradición. Según el artículo 350 de Código Bustamante y el artículo 2,

ordinal 2 del Tratado entre Venezuela y Chile, la pena no debe ser inferior a un año de privación de libertad. Los demás Tratados diversos límites, por ejemplo el Tratado Bolivariano, en su artículo 5 y el Tratado entre Venezuela y Cuba, artículo V, se señala que debe exceder de seis meses de privación de libertad el máximo de la pena aplicable y en el Tratado de Venezuela y España, artículo 2, numeral 1 y en la Convención Interamericana sobre extradición, artículo 3, se fija el límite de dos años.

Dentro del mismo contexto de la extradición limitada a los delitos debe señalarse con relación a estos, que no solo se concede la extradición por delitos consumados, sino también por tentativa y frustración y a tales formas imperfectas del delito aluden la mayoría de los tratados. Asimismo, no solo se hace referencia a los autores del hecho punible, sino a los partícipes y a los encubridores.

1.3 **Principio de la especialidad**

Según el cual, el Estado requirente se compromete a juzgar al sujeto requerido sólo por el hecho por el cual ha solicitado su extradición y no por otro distinto.

1.4 **Principio de no extradición por delitos políticos.**

Según el artículo 6 de nuestra ley sustantiva, la extradición de un extranjero no podrá concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos.

Artículo 6.-

“La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no este calificado de delito por la ley venezolana”. **Cursivas nuestras**

2. **PRINCIPIO RELATIVOS A LAS PERSONAS:**

2.1. **Principio de la no entrega de los nacionales.**

Está consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. Antes de tener rango constitucional, este principio ya estaba previsto en el artículo 6 del Código Penal, según el cual la extradición de un venezolano no podía concederse por ningún motivo.

En igual sentido se orienta el artículo 345 de la Convención de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante, según el cual: *“Los Estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus nacionales estará obligada a juzgarlo”*.

Ahora bien, dado que la aplicación del referido principio no pretende la impunidad del nacional del Estado requerido, sino hacer efectivo el derecho que tiene todo Estado de imponer por sí mismo un castigo a sus nacionales, Venezuela al adoptarlo, lo hizo de forma tal que no diere lugar a la impunidad de los venezolanos por crímenes cometidos en el territorio de otro Estado. En tal sentido, el artículo 6 del Código Penal dispone que el nacional requerido en extradición *“deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana”*.

El principio de no entrega de los nacionales se extiende a los extranjeros naturalizados, pues la naturalización en Venezuela tiene por inmediata consecuencia equiparar al extranjero con el nacional, en lo que a sus derechos y deberes frente al Estado se refiere.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela confiere a los venezolanos por naturalización los mismos derechos que tienen los venezolanos por nacimiento, salvo las restricciones establecidas en ella y en las leyes de la República. Siendo así, es justo que los ampare de igual modo el principio de no entrega de los nacionales.

Ahora bien, es preciso acotar que tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en afirmar que esa excepción no tiene efecto retroactivo, es decir, que el mismo no debe ni puede extenderse a aquellos casos en que en la

fecha de comisión del hecho punible antecede al momento de naturalización del autor.

3. **Principio relativos a la acción penal, a la pena y a cumplimiento de otros requisitos procesales.**

- a) No se concedera la extradición si la acción penal o la pena han prescrito conforme a la ley del Estado requirente o del Estado requerido. Entre otros podemos mencionar. Artículo 359 del Código Bustamante.
Consagran este principi, entre otros, el Tratado entre Venezuela y Chile articulo 4, ordinal 2. Tratado entre Venezuela y Brasil Articulo III, letra c. Tratado Bolivariano Articulo 5, letra b, hace rerefencia solo al Estado requerido. Tratado entre Venezuela y Estados Unidos Articulo V, solo referido al Estado requirente; Tratado entre Venezuela y Belgica, articulo 7 solo referido al Estado requerido.
- b) No se concedera la extradición por los delitos que tengan asignada en la legislacion del Estado requirente la pena de muerte o pena perpetua. Articulo 6 del Código Penal Venezolano.

“No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua”.

Tal negativa se basa en la garantía constitucional de la “inviolabilidad de la vida”, consagrada en el artículo 43 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que protege al extranjero sea cual fuere el delito cometido en el otro país.

Asimismo, el numeral 3 del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que la pena **“no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán los treinta años”.**

En la mayoría de los tratados se establece esta disposición, aunque se señala que podrá, sin embargo, procederse a la extradición en tales casos: Si el Estado requirente se compromete a conmutar la pena (Tratado entre Venezuela y Brasil. Articulo XVII; Tratado entre Venezuela y Estados Unidos, Articulo IV, Tratado entre Venezuela y España Articulo 11. Tratado entre Venezuela e Italia Articulo 16, entre otros. “Los Estados partes no deberán conceder la extradición cuando se trate de un delito sancionado en el Estado

requirente con la pena de muerte, con la privación de libertad por vida o con penas infamantes, a menos que el Estado requerido obtuviera previamente del Estado requirente las seguridades suficientes, dada por la vía diplomática, que no impondra ninguna de las citadas penas a la persona reclamada o que sin son impuestas, dichas penas no serán ejecutadas”.

No se concedera la extradición si la persona reclamada ha sido ya juzgada y puesta en libertad, o ha cumplido la pena, o si esta pendiente de juicio en el Estado requerido, por el mismo delito que motiva la extradición (Artículo 358 del Código Bustamante).

Asimismo se consagra este principio, aunque con algunas variantes, en los Tratados Bolivarianos artículo 5, letra c, de Venezuela y Belgica, artículo V, letra c, Venezuela y Chile. Artículo 4, ordinal 1, Venezuela y España. Artículo 10.

Finalmente debemos hacer referencia al artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el cual consagra este principio, al disponer que.

“En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales. Drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos”.
Cursivas nuestras.

No obstante; no puede entenderse como absoluta esta prohibición, sino que debe interpretarse en congruencia con los principios mencionados anteriormente.

Prescripción de la acción penal o de la pena.

Constituye otro aspecto de gran importancia en esta materia, pues no se concederá la extradición de ninguna persona, si resultare que la acción penal o la pena dirigida en contra de estas, han prescrito conforme a la legislación interna del Estado requirente o la del Estado requerido.

CAPITULO IV

FUENTES DE LA EXTRADICIÓN:

No existe en Venezuela una ley especial de extradición. En tal sentido, se puede decir que en el Derecho Venezolano, las fuentes de la extradición son las siguientes:

1. Los tratados, convenios, acuerdos internacionales suscritos por la República, bilaterales o multilaterales de Extradición que enumeramos seguidamente:
 - a) Venezuela y Bélgica, suscrito en 1.884
 - b) España y Venezuela, suscrito en 1.884
 - c) Venezuela y Cuba, suscrito en 1.910
 - d) Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, suscrito en 1.911
 - e) Venezuela y Estados Unidos, suscrito en 1.922
 - f) Venezuela e Italia, suscrito en 1.930
 - g) Venezuela y Brasil, suscrito en 1.938
 - h) Venezuela y Chile, suscrito en 1.962. Publicado en Gaceta Oficial de Venezuela N° 27.632 de 4 de enero de 1.965
 - i) Convención Interamericana sobre extradición o Convención de Caracas, de 1.981
 - j) Tratado Venezuela y Colombia, suscrito en 1.985
 - k) Tratado Venezuela y Australia, suscrito en 1.988
 - l) Venezuela y Uruguay. Publicado en Gaceta Oficial N° 5.265 Extraordinario del 1 de Octubre de 1.998.

2. Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Artículo 69
3. El Código Penal Venezolano
4. El Código Bustamante, en sus artículos 344 al 381, con excepción de los artículos 348, 360 y 378, reservados por Venezuela. Este código fue aprobado el 20 de febrero de 1.928, en la sexta conferencia americana (La Habana, Cuba).
5. El Código Orgánico Procesal Penal, en sus artículos 391 al 399, en lo atinente a los procedimientos de extradición.
6. Principios de Derecho Internacional, específicamente por la costumbre internacional y la reciprocidad..

Ahora bien; es importante recalcar que aun cuando el artículo 391 de Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:

“La extradición se rige por las normas de este Título, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República”. Cursivas y negrillas nuestras...

Sin embargo, consideramos este artículo se ha quedado corto con relación a las fuentes de la extradición, siendo así que se imponía, lo establecido en el artículo 6, en nuestra carta magna etc, y la misma referencia a los Principios de Derecho Internacional y la costumbre entre los Estados. No obstante, la mención de los Acuerdos y Convenios, haría procedente la entrega, cuando en ausencia de Tratados, se da un compromiso o convenio de reciprocidad que obliga a la entrega al Estado requirente en situaciones análogas, en razón de la cooperación internacional en la lucha contra el delito.

CLASIFICACIÓN DE LA EXTRADICIÓN

CAPITULO V

1. **Extradición Activa:**

Consiste en el conjunto de normas que disciplinan el acto mediante el cual se obtiene de un estado extranjero un imputado o un condenado para someterlo a un procedimiento penal a la ejecución de una sentencia de condena, tambien se le denomina extradición del extranjero.

Extradición Pasiva:

Consiste en el conjunto de normas que van a disciplinar el acto a traves del cual se concede o se ofrece a otro estado la entrega de un imputado o de un condenado.

2. **Extradición Necesaria u Obligatoria:**

Si, entre el Estado requirente y el Estado requerido, está en vigencia un Tratado de extradición, el cual contempla el delito que motiva la solicitud, el Estado requerido está jurídicamente obligado a otorgar la extradición demandada por el Estado requirente.

3. **Extradición Facultativa o Potestativa:**

Cuando no existe tratado vigente, entre los Estados requirente y requerido, o cuando, existiendo tal tratado, en él no se incluye el delito que motiva la solicitud, en tal sentido, el Estado requerido no está jurídicamente obligado a conceder la extradición solicitada por el Estado requirente. Sin embargo, en tal caso, el Estado requerido puede, en virtud de un acto de soberanía, otorgar la extradición, es por ello, que entonces recibe este nombre.

4. **Extradición en Transito:**

Es cuando una vez el Estado requerido concede la extradición solicitada por el Estado requirente, mas, para que la persona extraída llegue al Estado que obtuvo la extradición, es necesario que dicha **persona y sus guardianes atraviesen el territorio de un tercer**

Concurso de Solicitudes:

El concurso de solicitudes, refiere al hecho relativo al momento en que varios países reclamen a un mismo delincuente, por supuesto antes de producirse la entrega. El Código Bustamante establece en el artículo 347 establece:

“Si varios Estados contratantes solicitan la extradición de un delincuente por un mismo delito, debe entregarse a aquel en cuyo territorio se haya cometido”

Por su parte, el artículo 348 del mismo tratado de Derecho Internacional Privado, estipula:

“Caso de solicitarse por hechos diversos, tendrá preferencia el Estado contratante en cuyo territorio se haya cometido el delito más grave, según la legislación del Estado requerido”

Es decir, que si se tratase de varios delitos (delitos distintos); la persona solicitada en extradición, se entregará al país en cuyo territorio se cometió el delito más grave, de acuerdo a lo que en relación a esta materia, determine las Leyes del Estado requerido”

De la misma manera, el Código que nos ocupa, en este momento establece en su artículo 349 lo siguiente:

“Si todos los hechos imputados tuvieran igual gravedad, sera preferido el Estado contratante que presente primero la solicitud de extradición. De ser simultáneas, decidirá el Estado requerido, pero debe conceder la preferencia al Estado de origen o, en su defecto, al del domicilio del delincuente, si fuere uno de los solicitantes”

Ampliación de Extradición:

Es la que permite a la autoridad judicial competente del Estado requirente, poder juzgar al extraditable por hechos distintos de los que motivaron la primera petición de extradición, previo consentimiento del estado requerido. La ampliación puede concederse tanto en el supuesto de que el imputado o acusado, se encuentre en el Estado requerido por no haberse ejecutado aún la extradición, o bien por tener responsabilidad pendiente, o por otra causa, como en el caso de que ya hubiera sido ejecutada la extradición.

CAPITULO VII

EXTRADICIÓN ACTIVA

Consiste en un conjunto de normas que vienen a disciplinar, regular, normar el acto mediante el cual se obtiene de un estado extranjero denominado requerido y previa solicitud de otro Estado denominado requirente, un imputado, acusado o condenado para someterlo a un procedimiento penal, a la ejecución de una sentencia de condena, según las leyes del país que lo solicita, tambien se le denomina extradición del extranjero.

Artículo 392 eiusdem

“Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se halla en pais extranjero, solicitara al juez de control inicie el procedimiento de extradición activa.

A tales fines, el tribunal de la causa se dirigira al Tribunal Supremo de Justicia, quien dentro del lapso de treinta dias contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declara si es procedente o no solicitar la extradición, y en caso

afirmativo, remitira copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional.

En caso de fuga de quien este cumpliendo condena, el tramite ante el Tribunal Supremo de Justicia le corresponde al juez de ejecución”

De lo establecido en este articulo se infiere que una vez que el Ministerio Público tuviere noticias de que a un imputado contra quien se haya dictado una medida cautelar de Privación de Libertad, solicitara al juez de control que inicie el procedimiento de extradición activa. Se supone que a la dictación de la medida de prisión a que se refiere el encabezamiento del articulo 250 del Código Organico Procesal Penal.

“El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, podra decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o participe en la comisión de un hecho punible.
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.”

Omissis

El mismo se contrae a la emisión de una orden de aprehensión, ya que la verdadera medida de privación judicial de libertad, en tanto medida de coerción personal, no puede ser dictada en ausencia del imputado, sino en la audiencia de presentación de éste ante el tribunal de control dentro de las cuarenta y ocho horas siguiente a su captura. El asunto es de vigueta en orden al problema de la libertad en el proceso penal, pero es obvio que lo que se quiere es que una vez que el juez de control ordene la captura del interfecto, lo que puede ocurrir sin que la persona requerida haya sido imputada formalmente, se puede ya tramitar su

extradición activa. En todo caso se trata de aligerar este trámite, sin tener que esperar a la presentación de una acusación, trasladándolo de la fase intermedia donde estaba antes de la Reforma del COPP del 2008, a la fase preparatoria temprana, habida cuenta que los que huyen al extranjero no siempre esperan que se le impute formalmente o que se les acuse.

CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DE LA EXTRADICIÓN ACTIVA:

1. Que la extradición solo puede pedirse después que el Juez de Control haya dictado un orden de aprehensión del sujeto indicado, aun cuando ni siquiera se le haya imputado formalmente.
2. Que es el Juez de Control el sujeto legitimado para solicitar al Tribunal Supremo de Justicia, a instancia del Ministerio Público, el inicio del procedimiento de extradición activa y que se pronuncie sobre la pertinencia o no de ella. Esto indica que el Ministerio Público no puede dirigirse directamente al Tribunal Supremo de Justicia con este tipo de solicitud, y que, a su vez, el Máximo Tribunal puede examinar las razones que tuvo el Juez de Control para decretar la captura del solicitado.
3. Que se conozca de manera cierta que el acusado se halla en un país determinado, ya que la solicitud de extradición debe dirigirse a un Estado concreto y no a la comunidad internacional en general.
4. Que en los casos de fuga de quien este cumpliendo condena, el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a los jueces de ejecución, ya sea de oficio o a instancia de la víctima, del Ministerio Público o de las autoridades penitenciarias.
5. Es el Tribunal Supremo de Justicia el único órgano facultado para decidir si hay mérito o no para solicitar la extradición, ya que este es un procedimiento muy costoso para el erario público y no debe solicitarse por casos que no ameriten un fundado interés público (Principio de la mínima significación del hecho).

El Tribunal Supremo de Justicia, dentro del lapso de treinta días contados a partir de la recepción de la documentación pertinente, declarará si es procedente o no la extradición. Si el Supremo acuerda la solicitud de extradición, así lo comunicará al Ejecutivo Nacional a fin de que le de curso por vía diplomática, en caso contrario. Si rechaza la solicitud de extradición devolverá las actuaciones al Juez de Control remitente y procederá a librar las

correspondientes requisitorias y dispondra la suspensión del curso del proceso sea habida la persona solicitada.

TRAMITACIÓN DE LA EXTRADICIÓN:

Artículo 393

“El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Relaciones Exteriores certificará y hará las traducciones cuando corresponda, y presentara la solicitud ante el gobierno extranjero en el plazo máximo de sesenta días”.

Si el Tribunal Supremo de Justicia determina la procedencia de la extradición , remitira copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual certificará y hara las traducciones de los recaudos cuando corresponda, y presentara la solicitud ante el gobierno extranjero en el plazo máximo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la decisión que declara procedente la extradición activa.

MEDIDAS PRECAUTELATIVAS EN EL EXTRANJERO

Artículo 394

“El ejecutivo nacional podrá requerir al pais donde se encuentra la persona solicitada, su detención preventiva y la retención de los objetos concernientes al delito, con fundamento en la solicitud hecha ante el Tribunal Supremo de Justicia por el Juez o Jueza competente, segun lo establecido en el articulo 392.

Cuando se efectúe dichas diligencias el organo al que corresponda debiera formalizar la petición de extradición dentro del lapso previsto en la convención, tratado o norma de derecho internacional”.

Una de las medidas consustanciales que debe a la extradición activa es la solicitud que se debe hacer al Estado donde se encuentra la persona solicitada para su detención preventiva y la retención de los objetos concernientes al delito, para lo cual servirá de fundamento la actuación judicial que cursa ante los tribunales del Estado requirente, en el caso de Venezuela, la solicitud hecha ante el Tribunal Supremo de Justicia, por el juez competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 395 del Código Organico Procesal Penal. El aseguramiento del solicitado en extradición se justifica por el hecho de que los delitos que ameritan extradición son generalmente delitos muy serios y porque ademas se trata de personas que se han trasladado a otro Estado a objeto de evadir la acción de la justicia del Estado requirente, dado cumplida prueba de su vocación de fuga. No obstante, es posible tramitar la extradición de personas en libertad conforme a los principios del sistema acusatorio, pero ello evidentemente no constituye el fin de este artículo, por cuanto el mismo supone que la solicitud de extradición solo se hará efectiva cuando el Estado requerido haya aprehendido al solicitado.

CAPITULO VIII

EXTRADICIÓN PASIVA

Consiste en el conjunto de normas que vienen a reglamentar el acto mediante el cual se concede o se ofrece a un Estado denomina requirente, la entrega de un imputado o de un condenado, a objeto de que este sea juzgado de acuerdo a las leyes de dicho país.

Artículo 395:

“Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se halle en territorio de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida”.

Respecto a nuestro país la extradición pasiva, se produce cuando un Estado requirente solicita a Venezuela a alguna persona que se halle en nuestro territorio para juzgarla. En este caso el Ejecutivo Nacional será quien reciba la solicitud por órgano del Ministerio de

Relaciones Exteriores, via diplomática, y en tal caso se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, que será el que deberá decidir si tal solicitud es admisible o no.

MEDIDA CAUTELAR

Artículo 396:

“Si la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado o imputada, el Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquel o aquella.

Una vez aprehendido o aprehendida deberá ser presentado o presentada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes ante el Juez o Jueza que ordenó su aprehensión, a los fines de ser informado o informada acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.

El Tribunal de Control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos”.

De acuerdo a la concepción aprehensionista de la extradición, este artículo contiene una norma que raya en la inconstitucionalidad, por cuanto explana que el tribunal de control podrá ordenar a solicitud del Ministerio Público, y según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de hasta por sesenta (60) días, de aquella persona cuya detención y aprehensión ha sido solicitada por un gobierno extranjero, cuando el mismo no haya presentado la documentación judicial respectiva, en la cual se fundamente dicha solicitud, simplemente sobre la base de un compromiso de entregarla después.

En tal sentido; analizando que en caso de que el tribunal de control ordene la detención de una persona sin fundamento alguno, y además por sesenta días, como podemos observar ésta situación no encuadra con los supuestos estipulados en el artículo 250 eiusdem y pareciera que colidir con el artículo 44, numeral 1 de nuestra carta magna, y con casi todo

los numerales del artículo 49 de la misma, ya que en principio el Estado requirente no consigna los recaudos que en efecto den fe, prueben el delito y la posible responsabilidad penal del solicitado.

En relación a ello surgen necesariamente las siguientes interrogantes:

Una vez que el Juez deba informarle al imputado o acusado, los cargos que se le imputan, en atención a que lo hará.

¿Que otra cosa le informara el juez de control a la persona detenida, además que un estado determinado lo quiere detenido?

¿Sobre que fundamento legal y fáctico prodrá el juez de control resolver la privación preventiva de libertad de una persona que se encuentre por ejemplo legalmente en el país?

¿Sobre que base podría el aprehendido defenderse?

En tal caso, esa audiencia ante el juez de control, a parte de innecesaria, seria de mero trámite y de allí todo el mundo saldrá directamente a un recinto carcelario. En tal sentido debería ser el Tribunal Supremo de Justicia, el unico tribunal competente en materia de extradición pasiva, el que resolviera sobre las medidas cautelares imponibles al solicitado, conforme a la documentación remitida por el Estado requirente y la legislación venezolana al respecto (artículo 250 y siguientes del COPP).

LIBERTAD DEL APREHENDIDO

Artículo 397

“Vencido el lapso al que se refiere en artículo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ordenara la libertad, del aprehendido o aprehendida si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación”.

Partiendo de lo establecido y comentado en el artículo anterior, nuestra legislación admite que pueda privarse de la libertad a una persona hasta por sesenta días, sobre la promesa de presentación a posteriori de la respectiva documentación en la cual se fundamente dicha detención objeto de la extradición, por el Estado extranjero, como se puede observar se funda en estos planteamiento el irrespeto de otros Estados hacia nuestra inconstitucionalidad, pues lo viable sería que quien solicite la extradición de cualquiera de nuestros habitantes, la presente formalmente, es decir con todos los recaudos adjuntos, sobre todo cuando sabemos que muchos de los que se denominan países desarrollados, no darían curso jamás a una medida cautelar de extradición si no les presentamos debidamente los recaudos exigidos, para tal efecto, no obstante, es de suponer que si se pone en libertad a alguien que ha sido solicitado en extradición por un delito grave, este después de tal prevención, no se escape, lo que dejaría sin efecto todos los trámites relativos al tema que nos ocupa.

ABOGADOS DE LOS GOBIERNOS EXTRANJEROS

Artículo 398

“Los gobiernos extranjeros podrán designar un abogado o abogada para que defienda sus intereses en este procedimiento”.

Es necesario aclarar que si bien es cierto que los gobiernos extranjeros podrán designar un abogado, para que defienda sus intereses en un procedimiento de extradición, se refiere a un abogado de libre ejercicio en Venezuela, es decir; no pueden hacerse representar por abogados extranjeros en este procedimiento, conforme a lo establecido en nuestra excluyente **Ley de Abogados**, la cual reza en su artículo 14, lo siguiente:

“A los nacionales o extranjeros, graduados en Universidades del Exterior, que no haya obtenido en Venezuela el título de Abogado de la República o la revalida del suyo les está prohibido el ejercicio de la profesión de Abogado”. **Cursivas y subrayado nuestro.**

CAPITULO IX

PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRADICIÓN EN VENEZUELA

Como ya hemos estudiado, en Venezuela, la extradición se encuentra regulada como un procedimiento especial en el Título VI del Código Orgánico Procesal Penal (C.O.P.P.), que abarca desde el artículo 391 hasta el artículo 399, denominado “Del Procedimiento de Extradición”.

Artículo 399

“El Tribunal Supremo de Justicia convocara a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado o solicitada. A esta audiencia concurrirán el o la representante del Ministerio Público, el imputado o imputada, su defensor o defensora y el representante del gobierno requirente, quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de quince días”.

Ahora bien; es importante recalcar que las precauciones adoptadas para la concesión de esta institución, tienden a evitar que mediante su solicitud se esté ocultando un deseo de venganza. La extradición lleva consigo, el firme propósito de justicia y seguridad jurídica.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la sentencia número 184 del 15 de mayo del 2003, considera que en la extradición debe existir una exigencia probatoria. Por cuanto: *“En los casos de extradición de procesados, se debe ser más exigente en cuanto a las pruebas que cuando se trata de la solicitud de entrega para la ejecución de una sentencia condenatoria. Esto, por cuanto tratándose de un procesado contra el cual se ha librado un auto de detención o de arresto, tal sujeto goza de la presunción de inocencia hasta tanto no se dicte sentencia definitivamente firme e, igualmente, tampoco existe un proceso en el cual se haya podido ejercer las garantías procesales del contradictorio en la defensa”*.

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN

1. La copia certificada del auto de detención o decisión equivalente, de los elementos probatorios demostrativos de los presuntos delitos y de la presunta participación del reclamado, para el caso de procesados; copia de la sentencia

condenatoria definitivamente firme dictada por la autoridad judicial competente del Estado requirente.

2. Si se trata de condenados; además de la copia de las disposiciones legales que tipifiquen el hecho delictivo y establezcan la sanción aplicable; un resumen de los hechos y los datos filiatorios que permitan la identificación personal del solicitado y su nacionalidad. Todos estos documentos deben estar traducidos al idioma del país requerido.
3. Una vez examinados los requisitos de forma y de fondo, y practicada la detención preventiva del solicitado, quedará a potestad del Estado requerido conceder o negar la extradición, decisión que deberá ser motivada por el órgano competente, que en el caso de Venezuela es el Tribunal Supremo de Justicia.

El artículo 392 de nuestra ley adjetiva, dedicado a la **Extradición Activa**, establece que cuando se tuvieren noticias de que un imputado respecto del cual el Ministerio Público haya presentado acusación y el Juez de Control haya dictado una medida cautelar de privación de libertad se encuentre en país extranjero, el Juez de Control se dirigirá a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de solicitar se tramite su extradición. Para ello remitirá al Máximo Tribunal copia de las actuaciones que fundamentan su petición. Asimismo, establece que en caso de fuga de quien esté cumpliendo condena, el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia le corresponderá al Juez de Ejecución.

En ambos casos, el Tribunal Supremo de Justicia, tendrá un plazo de 30 días, contados a partir del recibo de la documentación, para decidir si es procedente o no solicitar la extradición, previa opinión del Ministerio Público, atribución que tiene su fundamento en el numeral 16 del artículo 108 del C.O.P.P. en concordancia con el numeral 13 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y para la cual el Tribunal Supremo de Justicia hará la notificación correspondiente, a fin de que el Ministerio Público efectúe el debido pronunciamiento. En caso de ser procedente la extradición, corresponderá al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores, tramitar la solicitud de extradición ante las autoridades del país extranjero donde se encuentre el solicitado, en un plazo máximo de sesenta días, y a tal efecto realizará las certificaciones y traducciones que sean necesarias, como lo establece el Artículo 393 del C.O.P.P.

El Ejecutivo Nacional podrá solicitar al país requerido la detención preventiva del solicitado así como la retención de los objetos concernientes al delito, según lo estipulado en el Artículo 394 del C.O.P.P. En este caso, la solicitud de extradición deberá formalizarse dentro del lapso previsto en los tratados internacionales o normas de derecho internacional aplicables.

Respecto a la **Extradición Pasiva**, el artículo 395 del C.O.P.P., establece que cuando un gobierno extranjero solicita la extradición de quien se encuentre en territorio venezolano, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida. Por tanto, la Misión Diplomática del Estado requirente acreditada ante el gobierno nacional remitirá la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual a su vez la envía al Ministerio del Interior y Justicia. Si el solicitado se encuentra en el país, el Ministerio Público solicitará al juez de control la detención preventiva con fines de extradición. Si el tribunal la ordena, remitirá los recaudos al Tribunal Supremo de Justicia para que éste decida sobre la procedencia de la extradición.

En caso de que la mencionada solicitud se presente sin la documentación necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla posteriormente, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado, el Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, según la gravedad y la urgencia del caso, la medida cautelar contra el imputado, señalando un término perentorio para la presentación de los referidos documentos, el cual no podrá ser mayor de sesenta (60) días continuos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 396 del C.O.P.P.

El artículo 397 del C.O.P.P. contempla que, vencido el lapso de 60 días, si no se produjo la documentación ofrecida, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido, sin perjuicio de volver a acordar nuevamente la privación de libertad, si posteriormente se recibe dicha documentación.

El artículo 398 del C.O.P.P. establece la facultad de los gobiernos extranjeros de designar un abogado para la defensa de sus intereses en el procedimiento especial de extradición.

Finalmente, según el artículo 399 del C.O.P.P., el Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del solicitado, convocará a una Audiencia Oral a la que concurrirán el Representante del Ministerio Público, el imputado, su defensor y el representante nombrado por el gobierno requirente para defender sus intereses, quienes expondrán sus alegatos. Concluida la Audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de quince (15) días.

CAPITULO X

TENDENCIAS ACTUALES DE LOS TRATADOS DE EXTRADICIÓN Y DIFICULTADES PARA LA ACEPTACIÓN DE ESAS TENDENCIAS

1. Tendencias Actuales:

La aparición de las enormes multinacionales y los acuerdos entre los propios países han conseguido un gran desarrollo del comercio; esto unido a la casi total desaparición de los factores tiempo y distancia en la época actual, a través de los caminos del aire, proyectan en nuestros días una imagen de un mundo bastante mas reducido, completamente diferente del que había a finales del siglo pasado, en que

se hicieron los primeros intentos de formular un código coherente y con sentido sobre la extradición.

Los encargados del cumplimiento y aplicación de la ley tienen que hacer frente a delincuentes internacionales cuyas técnicas cambian con gran rapidez y a la ampliación de las especialidades en las que pueden operar; los progresos en la técnica e investigación de aparatos electrónicos, paralelos a nuevas formas de criminalidad, han hecho posible la aparición de bandas internacionales con ramificaciones en diferentes países, cuya cabeza suele ser muy difícil de detectar, al disponer de medios capaces de dirigir a distancia sus actividades.

El surgimiento de esta categoría de malhechores, capaces de organizar el crimen a escala internacional, impone el que su represión haya de ser considerada dentro de la misma esfera.

Actualmente se dan tres tendencias fundamentales en materia de extradición:

1. Una estrecha cooperación por parte de las naciones, destinada a ampliar el alcance de la extradición y acelerar el correspondiente procedimiento.
2. Una mayor preocupación por salvaguardar los derechos del hombre y la libertad individual.
3. Un mayor perfeccionamiento técnico del procedimiento de extradición.

Conseguir que todas las leyes de extradición estén expresadas de modo adecuado a las necesidades del mundo moderno o que, al menos, estén inspiradas en el propósito ferviente y la intención sincera de aprehender a los delincuentes que no respeten las fronteras nacionales es básico para una justicia que hasta ahora tropezó con numerosos impedimentos y dificultades en su lucha contra la delincuencia internacional. Una de esas dificultades a vencer es la diversidad de principios de extradición, tan diferentes de unos países a otros.

El derecho internacional de extradición está basado en tratados bilaterales o multilaterales cuyas principales líneas se pueden concretar en:

- a) La enumeración de los delitos que dan lugar a extradición ha estado siempre bien definida, como también lo ha estado la naturaleza de tales delitos, específicamente determinados en los tratados de extradición.
- b) La persona extraditada sólo puede ser juzgada por el delito o delitos por los que su extradición haya sido concedida, y no por ningún otro, a menos que consienta en ello el extraditatus. Otra cosa muy distinta sería que una vez cumplidas sus responsabilidades por el expediente de extradición, esa persona permaneciera en el Estado donde fue juzgado por tiempo superior al

establecido en las leyes, ya que esto le hará perder esa inmunidad conseguida por medio de su extradición.

La tendencia actual, al formar los tratados, es la de hacer exclusiva mención de aquellos delitos que no son extraditables y la de sustituir el consentimiento del extraditado por el del país que concedió la extradición, si hubiere de ser juzgado por otros hechos distintos de aquellos por los que se otorgó.

- c) La nacionalidad del delincuente es una circunstancia verdaderamente importante. La norma general de los Gobiernos es la de denegar la extradición de sus nacionales y conceder la de los extranjeros, siempre de conformidad con las leyes vigentes. En los supuestos de denegación de la extradición de los propios nacionales siempre cabe la posibilidad de que sea enjuiciado el presunto delincuente en su país, para lo que será necesario que las autoridades judiciales del país requirente envíen a las del requerido los documentos necesarios para la apertura del correspondiente expediente.
- d) En caso de urgencia está prevista la detención preventiva del reclamado, para lo que bastará el envío por parte del país requirente de un aviso transmitido, bien utilizaron la vía INTERPOL, o la vía diplomática debiendo estarse entonces a lo que disponga el convenios correspondiente o la ley, en cuanto al contenido de la petición, debiendo enviarse acto seguido la correspondiente comunicación en regla por la vía diplomática.
- e) Tanto el plazo de detención preventiva, como el de presentación de documentos por la vía diplomática está establecido en los tratados o en las leyes naciones, en defecto de aquellos.
- f) Para el estudio del expediente de extradición por parte de las autoridades judiciales del Estado requerido es indispensable que las del estado requirente presenten testimonio de la sentencia condenatoria o mandamiento de prisión, o cualquier otra providencia que tenga la misma fuerza, a la que se acompañarán las circunstancias del delito y cuantos datos personales se posean sobre el reclamado.
- g) El delito que motiva la demanda ha de estar incluido en el convenio firmado por los Estados requirente y requerido; y si no existiere, darse la doble incriminación, o que se formule mediante canje de nota la promesa formal de reciprocidad.
- h) La ejecución de la extradición queda suspendida a que el extraditaros cumpla con las responsabilidades en que hubiera incurrido en el país requerido.

- i) Normalmente, para la concesión de la extradición los tratados señalan el tiempo mínimo de prisión a que ha de ser condenado el extraditatus por el delito objeto de la demanda.
- j) Y es al tribunal o magistrado que corresponde conocer del procedimiento de extradición al que le está reservado el derecho de averiguar si la demanda es regular, procede de un Estado al que compete la razón de pedirla, si se han observado las formalidades prescritas y el poder de indagar sobre la identidad del detenidos y del hecho derivado del principio de que un Estado no puede renunciar a la aplicación de la jurisdicción como atributo de soberanía, y si el delito está comprendido dentro del repertorio de los enumerados en el tratado vigente entre ambos Estados, requirente y requerido, pero en ningún caso indagar sobre si la persona reclamada es sospechosa o culpable del delito de que está acusada ya que esto implicaría una ilegítima intromisión del Estado requerido en la esfera de la soberanía del Estado requirente, bastando la existencia de indicios de criminalidad reflejados en los documentos enviados para que el tribunal se pronuncie sobre la convivencia o no de acceder a la extradición solicitada.

2.- Dificultades para la aceptación de los Principios:

Las dificultades más sobresalientes para la aceptación de esos principios básicos imperantes en los tratados, y que pueden motivar la denegación de la extradición son:

1. Las diferencias entre los sistemas jurídicos y las disposiciones legales de los países. Algunas de las extradiciones no llegan a consumarse debido a la carencia de punidad, en las leyes del Estado requerido, del delito objeto de la demanda.
2. El espíritu y la letra de las leyes y también la jurisprudencia obligan a proteger los intereses de los nacionales y, a veces, de los propios extranjeros.
3. La falta de pruebas de la presencia física del delincuente en el país requirente, en el momento en que se cometió la infracción, puede ser también motivo de denegación.
4. Puede ocurrir que la extradición de un fugitivo alcance en los medios de comunicación y en la opinión política tal eco e importancia que el delito que motiva la acusación termina por desvirtuarse y tomar un cariz político.
5. Los sistemas judiciales de los países son diferentes. En algunos casos los tribunales exigen gran abundancia de pruebas para considerar la posibilidad de acceder a la solicitud de extradición; esto hace que el procedimiento resulte largo, que los plazos para la entrega de esas pruebas se agoten y, en definitiva, que el delincuente haya de ser puesto en libertad, de la que

inmediatamente hará uso para abandonar el país, y al estar el corriente de su situación, poder eludir con mayor facilidad la acción de la justicia.

6. Todos los tratados establecen la denegación de la extradición por aquellos delitos que sean de naturaleza política.

CAPITULO X

JURISPRUDENCIA

Sentencia N° 241, Expediente E02-0129, Magistrado Ponente: Dr. Rafael Pérez Perdomo de fecha 17/05/2002:

(...) Siendo la oportunidad para decidir sobre la petición extradicional planteada, esta Sala pasa a emitir pronunciamiento al respecto, lo cual hace en los términos siguientes:

Conforme al Tratado de Extradición suscrito por el Reino de España y la República de Venezuela, de fecha 30 de septiembre de 1990, *la extradición tendrá por finalidad el cumplimiento de una condena o para procesar al solicitado de extradición*. En este último caso se impone al Estado requirente, de conformidad con el artículo 8, ordinal 1º, del referido Tratado, anexar a la demanda de extradición el auto de prisión expedido contra el solicitado, el cual deberá ser acompañado además con las declaraciones, documentos y evidencias que le hayan servido de fundamento.

El único recaudo ofrecido por el Gobierno de España para la solicitud extradicional es una copia certificada de la orden de prisión provisional dictada el 9 de julio de 1992, por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Gijón, Asturias, España, contra los ciudadanos Aurelio Paradelo Fuentes, José Bandín Rey y José Manuel Alonso González, por el delito de tráfico de drogas previsto en los artículos 344 y 344 bis c, n° 3, del Código Penal español vigente para la fecha de la perpetración de los hechos imputados y la transcripción de las disposiciones legales citadas en dicha medida cautelar, pero en ningún otro medio de convicción procesal fue acompañado al efecto.

Cabe señalar que si bien *el artículo 271 de la Constitución establece que en ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros responsables de los delitos drogas, ello supone que se hayan cumplido previamente con las exigencias previstas en los Tratados que rigen la materia*. En el presente caso, como quedó dicho el Gobierno de España, hasta este momento, no ha acompañado los recaudos a que hace referencia el Tratado anteriormente referido (...)

Sentencia N° 112, Expediente E07-0438, Magistrado Ponente: Dr. Hector Manuel Coronado Flores, de fecha 28/02/2008:

(...)Revisadas las actas que conforman el citado expediente, se constató que no reposan en el mismo, la Nota Diplomática de la Embajada de la República de Colombia, contentiva de la solicitud formal de extradición de los ciudadanos Pedro Manuel Pérez Mendoza y Gloria Marina Vanegas Castro, ni la transcripción de las disposiciones legales que tipifican y sancionan los delitos atribuidos a los referidos ciudadanos, razón por la cual resulta imposible verificar el cumplimiento de elementos esenciales de la extradición, como serían entre otros, la naturaleza y quantum de la pena, el principio de la doble incriminación, así como lo relativo a la prescripción de la acción penal.

Por otra parte, es preciso destacar que consta en el expediente, copia certificada de la cédula de ciudadanía expedida por la República de Colombia, de la ciudadana Gloria Marina Vanegas Castro, en la cual se señala que nació en La Concordia, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela, por lo que en ese sentido se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 69 de la Carta Magna en concordancia con el artículo 6 del Código Penal venezolano, los cuales establecen: En virtud de lo anterior, *no podrá concederse la*

extradición en el caso de la ciudadana Gloria Marina Vanegas Castro, por cuanto es venezolana de nacimiento y sólo podrá ser juzgada por el Estado venezolano, si los delitos imputados se encuentran tipificados y sancionados en la legislación venezolana. Ahora bien, con respeto a la detención preventiva con fines de extradición de los referidos ciudadanos, se advierte que este Despacho efectúa los trámites correspondientes de conformidad con lo previsto en el artículo 396 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre la base de la copia certificada del expediente de extradición remitida por esa Sala para la emisión de la respectiva opinión.

En consecuencia, ante la inexistencia de las formalidades necesarias, la opinión del Ministerio Público se orienta hacia la improcedencia de la tramitación anticipada de la extradición correspondiente de los ciudadanos Pedro Manuel Pérez Mendoza y Gloria Marina Vanegas Castro (...).

El artículo 395 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

"Extradición Pasiva. Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se halle en territorio de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud a el Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida".

El artículo 396 del Código Orgánico Procesal Penal, dice:

"Medida Cautelar. Si la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado, el tribunal de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquél, y remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos".

Ahora bien, según oficio N° 2492 del 26 de noviembre de 2007, suscrito por Berenice Bernal Iribaren, Directora General de Justicia y Cultos, mediante el cual informa que no tiene conocimiento que los ciudadanos PEDRO MIGUEL PEREZ MENDOZA y GLORIA MARINA VANEGAS CASTRO, se encuentren detenidos en algún centro carcelario del país.

Asimismo, no constan en autos la documentación original que sustente la presente solicitud de extradición, por lo que en consecuencia esta Sala se haya impedida de pronunciarse sobre la procedencia o no de la solicitud de extradición de los ciudadanos PEDRO MIGUEL PEREZ MENDOZA y GLORIA MARINA VANEGAS CASTRO, en virtud que no concurren los supuestos de procedencia. Y así se decide.

ANEXOS



LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

MAGISTRADO PONENTE DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

El Tribunal Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, mediante auto de fecha 3 de octubre de 2008, solicitó a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 392 del Código Orgánico Procesal Penal, la tramitación de la **EXTRADICIÓN ACTIVA** del ciudadano **JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ**, de nacionalidad española, con pasaporte de la Comunidad Europea N° AA901051, por cuanto al nombrado ciudadano se le sigue juicio por ante ese Tribunal, por el delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (ahora artículo 31, encabezamiento, de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas).

En fecha 15 de octubre de 2008, se recibió la presente solicitud de extradición, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se designó ponente al Magistrado Doctor HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

El Tribunal Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, anexó como respaldo a la solicitud de extradición activa, los siguientes recaudos:

1.- Copia certificada de la acusación presentada por el Ministerio Público contra el ciudadano **JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ**.

2.- Copia certificada de la sentencia dictada por el Tribunal Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, en fecha 12 de abril de 2005, mediante la cual se condenó al ciudadano JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ, a cumplir la pena de siete (7) años y seis (6) meses de prisión, por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (ahora artículo 31, encabezamiento, de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas).

3.- Copia certificada del oficio 0747 de fecha 28 de diciembre de 2005, en el cual el ciudadano Ministro de Interior y Justicia, informa al Cónsul General del Reino de España, la aprobación de la solicitud de traslado al Reino de España del penado JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ, de conformidad con la Ley Aprobatoria del Convenio entre la República de Venezuela y el Reino de España Sobre Ejecución de Sentencias Penales, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.980, Extraordinaria de fecha 2 de octubre de 1995.

4.- Copia certificada del oficio N°1070 de fecha 16 de mayo de 2006, suscrito por el Director General de Justicia y Cultos del Ministerio de Interior y Justicia, en el cual se le informa a la Juez Segunda de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, que el día 11 de mayo de 2006, fue entregado a las autoridades del Reino de España, el penado JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ.

5.-Copia certificada de la decisión de fecha 15 de octubre de 2007, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual anuló la sentencia condenatoria dictada el 12 de abril de 2005, por el Tribunal Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas.

6.-Copia certificada del auto emitido por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Madrid, España, mediante el cual se decretó la inmediata puesta en libertad del ciudadano JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ, en virtud de la declaratoria de nulidad de la sentencia condenatoria dictada en su contra.

7.- Copia certificada de la orden de aprehensión internacional N° 868-08 de fecha 25 de septiembre de 2008, librada por el Tribunal Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas.

DE LOS HECHOS

Se tramita la presente solicitud de extradición activa del ciudadano JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ, en virtud de la acusación presentada por el Fiscal Sexto del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, abogado GUSTAVO GONZÁLEZ, en la cual le fueron imputados los siguientes hechos:

“...El día 01 de octubre del 2004, siendo las 4:30 horas de la tarde, se encontraba el (GN) RODRÍGUEZ TAYURO MERALDO, titular de la cédula de identidad N° V- 14.025.893, adscrito a la Unidad Especial Antidrogas de Maiquetía, de servicio en el Sótano United del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, durante la revisión de los equipajes del vuelo N° 667, de la aerolínea ALITALIA, y a través de la pantalla de la máquina de rayos X, ubicada en el mencionado sótano, logró observar que una maleta de color azul grande marca TOURISTAR, que tenía adherida un ticket N° AZ558802, tenía sombras no acorde con la forma original, procediendo a detener preventivamente dicha maleta, seguidamente el funcionario procedió a solicitar la colaboración del agente de seguridad de la aerolínea para que localizara al pasajero dueño de la maleta. Posteriormente se presentó en el precitado sótano, el agente de seguridad de la aerolínea en compañía de un ciudadano que al solicitar su documentación personal (pasaporte) resultó ser y llamarse BARRIONUEVO SUAREZ JUAN, de nacionalidad española, titular del pasaporte de la Comunidad Europea N° AA9010051. Inmediatamente se solicitaron la colaboración (sic) de dos ciudadanos identificados como: MACHADO FERNÁNDEZ JOHAN BENITO, portador de la Cédula de Identidad N° V- 14.370.684 y JOSÉ EFRAIN BELLO ALFONSO, portador de la Cédula de Identidad N° V- 1.063.893, para que sirvieran de testigos en el presente procedimiento. Seguidamente se procedió a efectuar la revisión del mencionado equipaje según lo establecido en el Art. 205 del Código Orgánico Procesal Penal, (...) encontrándose oculto en la parte posterior de la maleta (...) siete (7) envoltorios elaborados en material plástico penetrante de presunta droga, en tal sentido se procedió a aplicársele el reactivo denominado ESA COCAINE TEST, y al colocar una pequeña muestra de la sustancia incautada, resultó ser cocaína. Luego el funcionario actuante procedió a la inspección corporal del ciudadano BARRIONUEVO SUAREZ JUAN, revisión en la cual no se detectó ningún tipo de sustancia de prohibida tenencia adheridas al cuerpo. Inmediatamente se le leyó el contenido del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando detenido a la orden de esta oficina fiscal...”

En fecha 12 de abril de 2005, el Tribunal Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, por el procedimiento abreviado por admisión de los hechos, condenó al ciudadano JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ, a la pena de siete (7) años y seis (6) meses de prisión, por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (ahora artículo 31, encabezamiento, de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas).

Posteriormente, el 15 de octubre de 2007, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, anuló la referida decisión condenatoria y ordenó al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, dictar nueva sentencia, al efecto expresó lo siguiente:

“...En el presente caso el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas desaplicó el segundo aparte del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal al considerar que dicha norma colide con los derechos constitucionales a la igualdad, la tutela judicial efectiva, la progresividad de los derechos humanos y del debido proceso consagrados en los artículos 21, 26, 19 y 49 numeral 4, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

(...)

Ello así, la Sala estima pertinente advertir, que de manera reiterada se ha sostenido el criterio, respecto al errado control de constitucionalidad que se ha venido ejerciendo en la desaplicación del segundo aparte del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en especial en lo relativo a la supuesta colisión del mismo con los derechos constitucionales a la igualdad, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la progresividad de los derechos humanos.

(...)

Así las cosas, debe reiterarse que el segundo aparte del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en el cual se dispone que “Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o previstos en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el Juez sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio”, no es contrario a los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la igualdad ni a la progresividad de los derechos humanos.

De forma tal que no observa esta Sala que al ciudadano Juan Barrionuevo Suárez, en su condición de condenado por la comisión del delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes

y psicotrópicas, sufra discriminación o algún perjuicio por la aplicación del segundo aparte del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que la gravedad del delito cometido tiene una pena que es proporcional.

Es por ello, que esta Sala Constitucional debe anular la decisión dictada el 12 de abril de 2005, por el referido Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, en la que por desaplicación del segundo aparte del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, se rebajó la pena aplicable al ciudadano Juan Barrionuevo Suárez, por la comisión del delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Así se decide...”.

El 9 de julio de 2008, por oficio N° 1410, el Cónsul General del Reino de España acreditado en Venezuela, remitió al Juzgado Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, copia de la Resolución de fecha 7 de julio de 2008, dictada por la Sección 4°, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Madrid, España,

en la cual se acordó la inmediata libertad del ciudadano JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ, en virtud de la nulidad del fallo condenatorio dictado en su contra, *“sin perjuicio de advertir a las autoridades de Venezuela que para el traslado de Juan Barrionuevo Suárez al objeto de que pueda celebrarse ante las autoridades competentes de dicho país un nuevo Juicio Oral y Público deberán emitir la pertinente Orden de Detención Internacional e iniciar el correspondiente procedimiento de extradición”*. .

En fecha 25 de septiembre de 2008, el Tribunal Sexto de Juicio, libró orden de aprehensión internacional en contra del ciudadano JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ, expresando que:

“...En tal sentido, siendo que el Tribunal Supremo de Justicia repuso la causa al estado de llevar a cabo el juicio oral y público contra el acusado Juan Barrionuevo Suárez, toda vez sobre el mismo pesa acusación fiscal por el delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, tipo penal considerado por nuestro máximo Tribunal como delito de lesa humanidad, esto aunado, que la orden de privación judicial decretada por el Tribunal Cuarto de Control en fecha 02-10-04, debe entenderse que está vigente, y por cuanto fue puesto en libertad en la Audiencia Nacional, Madrid España, es por lo que se ordena su inmediata detención, en consecuencia, se decreta la privación judicial preventiva de libertad contra el ciudadano Juan Barrionuevo Suárez, de

conformidad con los artículos 250 y 251, ordinales 2° y 3° del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE....”.

PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, numeral 38, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 392 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declarar la procedencia o no de la solicitud de extradición activa del ciudadano JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ, con pasaporte de la Comunidad Europea N° AA901051, y a tal efecto, observa:

El artículo 3 del Código Penal venezolano establece que: *“Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana”*.

Esta disposición consagra el principio de la territorialidad de la ley penal y da potestad al Estado venezolano para conocer de los delitos que se cometan dentro de su espacio geográfico.

Por su parte, el artículo 391 del Código Orgánico Procesal Penal, en materia de extradición, expresa que: *“La extradición se rige por las normas de este Título, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República”*.

Asimismo, el artículo 392 del citado Código Orgánico, dispone que:

“Extradición activa. Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado al cual le ha sido acordada la medida cautelar de privación de libertad, se halla en país extranjero, solicitará al Tribunal de Control inicie el procedimiento de la extradición activa.

A tales fines, el tribunal de la causa se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, quien dentro del lapso de los treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición, y en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional.

En caso de fuga de quien esté cumpliendo condena, el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia le corresponderá al Juez de Ejecución.” (Subrayado de la Sala).

Por otra parte, el Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y el Reino de España, del 28 de mayo de 1990, aprobado por el Poder Legislativo Nacional y publicado en Gaceta Oficial N° 34.476, dispone lo siguiente:

Artículo 1. *“Las partes contratantes se obligan, según las reglas y condiciones establecidas en los artículos siguientes, a la entrega recíproca de las personas a quienes las autoridades judiciales de una de las partes persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad impuesta judicialmente, que consista en privación de libertad”.*

Artículo 2. *“1. Darán lugar a extradición los hechos sancionados, según las leyes de ambas partes, con una pena o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años, prescindiendo de las circunstancias modificativa y de la denominación del delito.*

2. Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia, se requerirá, además, que la parte de la pena o medida de seguridad que aún falta cumplir, no sea inferior a seis meses

3. Cuando la solicitud se refiera a varios hechos y no concurriesen en algunos de ellos, los requisitos de los párrafos 1 y 2, la parte requerida podrá conceder también la extradición por éstos últimos.

4. la extradición procede respecto a los autores, cómplices y encubridores, cualquiera que sea el grado de ejecución del delito”.

Artículo 5. *“Para que proceda la extradición, es necesario que el delito que la motiva haya sido cometido en el territorio del estado requirente o que, cometido fuera de dicho territorio, tenga el estado requirente jurisdicción para conocer de ese delito...”.*

Artículo 8. *“1. Cuando el reclamado fuere nacional de la parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo con su propia ley. La cualidad de nacional se apreciará en el momento de la decisión sobre la extradición y siempre que no hubiere sido adquirida con el fraudulento propósito de impedir aquella.*

2. Si la parte requerida no accediere a la extradición de un nacional por causa de su nacionalidad por causa de su nacionalidad deberá, a instancia de la parte requirente, someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda proceder judicialmente contra aquél. A tal efecto, los documentos, informaciones y objetos relativos al delito podrán ser remitidos gratuitamente por la vía prevista en el artículo 15.

Se informará a la parte requirente del resultado que hubiese obtenido su solicitud”.

Ahora bien, el Tribunal Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, solicitó la extradición activa de un ciudadano de nacionalidad española identificado como JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ, con pasaporte de la Comunidad Europea N° AA901051, contra quien el referido Juzgado decretó medida privativa de libertad, por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (ahora artículo 31, encabezamiento, de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas).

El Fiscal Sexto del Ministerio Público del Circuito Judicial del Estado Vargas, abogado GUSTAVO GONZÁLEZ, presentó formal acusación en contra del ciudadano JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ, por la comisión del referido delito, cometido en territorio venezolano en perjuicio del Estado venezolano.

Es de resaltar que al ciudadano JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ, se le formuló acusación por hechos que tanto en el país requirente como en el país requerido constituyen delitos, que según la legislación patria, la acción penal para perseguirlos no se encuentra prescrita, no están castigados con pena de muerte, perpetua y además no son de los denominados delitos políticos ni conexos con éstos.

Por lo expuesto y por cuanto se tienen noticias ciertas, de acuerdo a los recaudos insertos en el expediente, que el ciudadano JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ, se encuentra en territorio español, conforme a lo establecido en los artículos 5, numeral 38, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 392 del Código Orgánico Procesal Penal, así como en el Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y el Reino de España, del 28 de mayo de 1990, esta Sala de Casación Penal, considera procedente solicitar al Reino de España, la extradición del nombrado ciudadano, por cuanto hay razones de hecho y de Derecho suficientes para su enjuiciamiento en la República Bolivariana de Venezuela, comprometiéndose el Estado venezolano a velar por los derechos y garantías del extraditable, contemplados en los tratados internacionales y en las leyes nacionales. **Así se decide.**

Para el caso que la parte requerida se rehusare a conceder la extradición del ciudadano JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ, basada en la nacionalidad española del mismo, el Gobierno de la República

Bolivariana de Venezuela, con fundamento en el artículo 8.2 del Tratado de Extradición suscrito entre ambas naciones, solicita al Reino de España, proceda judicialmente contra el nombrado ciudadano por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara procedente solicitar al Reino de España, la extradición del ciudadano **JUAN BARRIONUEVO SUÁREZ**, de nacionalidad española, con pasaporte de la Comunidad Europea N° AA901051.

Se ordena remitir copia certificada de la decisión y de las actuaciones que conforman el expediente al Poder Ejecutivo Nacional, por órgano del ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.

Publíquese, regístrese y ofíciase lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2008. Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

La Magistrada Presidenta,

Deyanira Nieves Bastidas

El Magistrado Vicepresidente,

La Magistrada,

Eladio Aponte Aponte

Blanca Rosa Mármol de León

El Magistrado Ponente,

La Magistrada,

Héctor Manuel Coronado Flores

Miriam Morandy Mijares

La Secretaria,

Gladys Hernández González

HMCF/cc

Exp N° 2008-0405



LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Magistrado Ponente Doctor ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

El 29 de abril de 2009, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio N° 1070-09, emanado del Juzgado Décimo Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual, remitió lo siguiente:

*“...Me dirijo a usted, en la oportunidad de remitirle anexo al presente oficio en sobre cerrado, la causa N° 13560-09...seguida al ciudadano **ECHEVERRIA LANDAZABAL IGNACIO**, titular de la cédula de identidad N° E-82.226.911, de conformidad con lo establecido en el artículo 395 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo le informo que dicho ciudadano se encuentra detenido en la División de Investigaciones de INTERPOL del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (SIC)”.*

El 29 de abril de 2009, se dio cuenta en Sala del recibo del mismo, asignándole la ponencia al Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 38 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 395 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal declarar la procedencia o no de la solicitud de **EXTRADICIÓN PASIVA** del ciudadano **IGNACIO ECHEVERRÍA LANDAZÁBAL**, de nacionalidad española, titular de la cédula de identidad número E- 82.226.911, en los términos siguientes:

II

Constan en el expediente, las actuaciones siguientes:

El 25 de abril de 2009, la Fiscal Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, presentó al ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal, ante el Juzgado Décimo Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por cuanto fue detenido por funcionarios de la División de Investigaciones de Interpol Caracas.

Esta detención se produjo, en virtud de existir Notificación Roja, publicada en el sitio Web de Interpol, al ser requerido por el Gobierno de España, debido a la presunta comisión del delito de asesinato, con orden de detención y resolución judicial equivalente.

En esa misma fecha, el Ministerio Público consideró que no estaban acreditados los elementos necesarios para instaurar el procedimiento de extradición, solicitando el envío del ciudadano español a la orden de Oficina Nacional de Identificación y Extranjería, a los efectos del procedimiento administrativo de deportación, indicado en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Extranjería y Migración.

El Juzgado Décimo Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en dicha oportunidad, declaró sin lugar la petición fiscal, ordenando su aprehensión: *“De acuerdo a lo antes descrito y requerimiento por el delito de Asesinato, es por ello que este Tribunal aplica lo contenido en el Artículo 391 y*

siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, en la causa signada con el N° 13560-09, nomenclatura de este Tribunal...”.

Se aprecia, igualmente en las actas:

Comunicación recibida por la secretaría, el 29 de abril de 2009, suscrita por el ciudadano Subcomisario Rodolfo Mcturk, Jefe de la División de Investigaciones de Interpol-Caracas, en la cual informó a la Sala de Casación Penal, que el ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal, se encuentra en *“calidad de depósito, en la sede de la Brigada de Acciones Especiales (B. A. E.) de este Cuerpo de Investigaciones”*.

Copia del oficio N° 096769 del 5 de mayo de 2009, emanada de la ciudadana Directora General de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, en cuyo texto informó que en esa fecha se remitió Nota Verbal a la Embajada del Reino de España, comunicando la situación del ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal. El ejemplar original de esta comunicación, fue recibida el 19 de mayo de 2009.

Copia fotostática de la Comunicación N° IDGRC1007359 del 13 de mayo de 2009, dirigida por la ciudadana Directora General de Relaciones Consulares a la ciudadana Directora General de Apoyo Jurídico de la Fiscalía General de la República, en la cual se expresa, lo siguiente:

“...Sobre el particular, cumpla en informar que mediante comunicación remitida vía fax, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia informó a esta oficina que en virtud de la referida Notificación Roja, el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esa Sala con oficio N° 1070-09 del 27 de abril de 2009, la causa N° 13560-09 constante de veintiocho folios útiles, relacionadas con el ciudadano español IGNACIO (IÑAKI) ECHEVERRÍA LANDAZÁBAL, portador de la cédula de identidad E-82.226.911...En ese sentido, se procedió a remitir Nota Verbal a la Embajada del reino de España en Caracas, a los fines de que tal situación se elevara al conocimiento de la

autoridad española que había librado la notificación internacional de captura...Por lo antes expuesto, esta Oficina se encuentra a la espera de un pronunciamiento de las autoridades españolas competentes, así como, de la documentación necesaria para la tramitación del pedimento que al efecto tengan a bien solicitar dichas autoridades...(sic)”.

Copia de la Nota Verbal número 157, emitida por la Embajada de España en la ciudad de Caracas, conforme a la cual informa, que el Gobierno de España, ha resuelto solicitar la extradición del aludido ciudadano español. Dicho recaudo, fue recibido en la Secretaría de la Sala, el 18 de mayo de 2009.

Misiva enviada por el Embajador del Reino de España, y recibida el 19 de mayo de 2009, en la que expuso: *“En contestación a su reciente carta del 11 de mayo de 2009, tengo el gusto de informarle de que ya he recibido instrucciones de mi Gobierno en el sentido de solicitar a la República Bolivariana de Venezuela la extradición del ciudadano español Iñaki Echeverría Landazábal. En próximos días, una vez reciba la documentación extradicional correspondiente, procederé al acto de solicitud formal”.*

Oficio N° 724 del 20 de mayo de 2009, suscrito por la ciudadana Directora General de Seguridad e Instituciones Religiosas del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, en la que remite copia de la Nota Verbal N° 157 del 13 de mayo de 2009, y en la que indicó:

“...Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de extenderle un cordial saludo, y a su vez remitirle, Nota Verbal N° 157 de fecha 14/05/2009 procedente de la Embajada del reino de España acreditada ante el Gobierno Nacional, mediante la cual informa que el Gobierno de España ha resuelto solicitar a la República Bolivariana de Venezuela la extradición del ciudadano español IGNACIO (Iñaki) ECHEVERRÍA LANDAZÁBAL, y en este sentido tan pronto reciban la documentación correspondiente procederán a formalizar dicho acto”.

Oficio N° 799 del 25 de mayo de 2009, enviado por la Dirección General de Seguridad Jurídica e Instituciones Religiosas del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, conforme el cual remite copia certificada de la Nota Verbal N° 162 de la Embajada del Reino de España en la República Bolivariana de Venezuela, y en la cual se adjuntó recaudos originales que guardan relación con el pedido de extradición del ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal. Estos documentos se recibieron en Secretaría, el 25 de mayo de 2009.

Al efecto, en la Nota Verbal antes citada, se expuso:

“...La Embajada del Reino de España...tiene la honra de solicitar a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela la extradición del Sr. IÑAKI LANDAZÁBAL ECHEVERRÍA, de nacionalidad española, al amparo del vigente Tratado de Extradición entre nuestros dos países, de 4 de enero de 1989. Contra el reclamado se sigue Sumario n° 102/1993-B en el Juzgado Central de Instrucción n° 4 de la Audiencia Nacional, por presunto delito de asesinato de carácter terrorista. La petición de extradición se insta por el referido Tribunal español, acompañada de la documentación extradicional que se adjunta...”.

En este sentido, se consignó Comisión Rogatoria Internacional, proveniente del Juzgado Central de Instrucción N° 4 de la Audiencia Nacional del Reino de España, suscrita por el ciudadano Magistrado Juez Fernando Andreu Merelles y la ciudadana Secretaria Judicial María Mosquera Loureda, en la que expusieron a las autoridades venezolanas, lo siguiente:

“DON FERNANDO ANDREU MERELLES, MAGISTRADO-JUEZ CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CUATRO DE LA AUDIENCIA NACIONAL, CON SEDE EN MADRID, tiene el honor de elevar a V. E. el presente de conformidad con lo acordado en el pedimento SUMARIO N° 102/1993-B, seguido por el delito de ASESINATO DE CARÁCTER TERRORISTA, contra IÑAKI LANDAZÁBAL ECHEVERRÍA, toda vez que habiéndose decretado su procesamiento y prisión provisional y, dado su ignorado

paradero, se publicaron requisitorias para su busca y captura e ingreso en prisión, se ha tenido conocimiento según comunicación de la Comisaría General de Información, de que el mismo se encuentra en VENEZUELA. Se acuerda por resolución de esta fecha proponer al Gobierno Español interesar la misma a las Autoridades competentes de Venezuela, la extradición del indicado procesado para ser enjuiciado por los Tribunales Españoles, en concreto por la Audiencia Nacional, y por el expresado delito por el que fue procesado. Por ello espero se autorice la extradición de IÑAKI LANDAZÁBAL ECHEVERRÍA, nacido el 14-08-1957 en Bilbao hijo de Kipiren y de Emile, quedando a la recíproca en supuesto análogo...”.

Conjuntamente con este instrumento, el Juzgado Central de Instrucción N° 4 de la Audiencia Nacional del Reino de España, agregó:

A) El Testimonio del Auto del 30 de abril de 2009, solicitando se proponga por el Gobierno del Reino de España al Gobierno de Venezuela, la extradición del procesado.

B) El Testimonio del dictamen emitido el 20 de junio de 2009, por el Excelentísimo Señor Fiscal de la Audiencia Nacional.

C) El Testimonio del Auto de Procesamiento y Prisión Provisional comunicada e incondicional del procesado del 22 de noviembre de 1.993, en la cual se aprecia lo siguiente:

*“...Los hechos relatados anteriormente, pueden ser constitutivos de un delito de asesinato, previsto/s y penado/s en el/ los artículo/s 406 del Código Penal Vigente, y de las actuaciones sumariales, aparecen méritos bastantes para reputar responsable/s criminalmente del/ los mismo/s al/los acusado/s **IGNACIO ECHEVERRÍA LANDAZÁBAL, VÍCTOR TEJEDOR BILBAO y JOSÉ JOAQUÍN OLEAGA OJEDA y MANUEL JOSÉ CHAVARRI LOPATEGUI**, al/los que procede declarar procesado/s, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y las atendidas, la penalidad al/ los inculcado/s a tenor de lo previsto en los artículos 503, 504, y 529 de la antedicha Ley Procesal, procede también, decretar la prisión provisional en la forma que luego se dirá del/los acusado/s... ACUERDA: SE DECLARA*

PROCESADO/S por razón de esta causa a IGNACIO ECHEVERRÍA LANDAZABAL, VICTOR TEJEDOR BILBAO y JOSÉ JOAQUÍN OLEAGA OJEDA y MANUEL JOSÉ CHAVARRI LOPATEGUI con quien/es se entiendan las sucesivas diligencias en el modo y forma que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se decreta la prisión provisional comunicada e incondicional de MANUEL JOSÉ CHAVARRI LOPATEGUI...se decreta, así mismo, la prisión provisional comunicada e incondicional de los también procesado IGNACIO ECHEVERRÍA LANDAZABAL, VICTOR TEJEDOR BILBAO Y JOSÉ JOAQUÍN OLEAGA OJEDA y encontrándose estos en ignorado paradero llámeseles por requisitorias que se publicarán en las órdenes generales...(sic)".

D) El Testimonio de los preceptos aplicables cuya remisión ha interesado el Excelentísimo Señor Fiscal y que han sido obtenidos de los Textos Legales correspondientes e insertados por fotocopia,

E) Positivas fotográficas y reseña dactilar relativas al encausado.

F) El Acta del caso, dictada el 30 de abril de 2009, al que se adjunta Testimonio de las pruebas en que se fundamenta la acusación.

La Nota Verbal N° 157, también fue enviada a esta Sala, por la Directora General de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, siendo consignada el 25 de mayo de 2009.

Por su parte, el mismo 25 de mayo de 2009, el ciudadano Director del Servicio Consular Extranjero del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, anexó la Nota Verbal N° 162 del 20 de mayo de 2009, conjuntamente con copia de los recaudos provenientes del Juzgado Central de Instrucción N° 4 de la Audiencia Nacional del Reino de España, anteriormente ya relacionados.

Así mismo, el 9 de junio de 2009, la Sala de Casación Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 399 del Código Orgánico Procesal Penal, fijó la audiencia pública, para el 17 de junio de 2009.

El 15 de junio de 2009, el ciudadano abogado Andrés Llovera Giliberti, defensor privado del ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal, renunció a la defensa, informando que la misma sería asumida por el ciudadano abogado Marco Antonio Rodríguez Acosta.

El propio 15 de junio de 2009, el ciudadano abogado Marco Antonio Rodríguez Acosta, una vez designado expresamente, como defensor privado del ciudadano Ignacio Echeverría Landaeta, solicitó el diferimiento de la audiencia.

El 17 de junio de 2009, la Sala acordó diferir la audiencia para el 30 de junio de 2009.

El 29 de junio de 2009, la defensa del ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal, consignó mediante diligencia, recaudos de interés, a favor de su defendido.

El 30 de junio de 2009, fue juramentada la defensa del ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal, y se llevó a cabo la audiencia especial, con la asistencia de las partes.

La ciudadana Fiscal ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, consignó escrito que contiene la opinión de la ciudadana Fiscal General de la República, en cuyo texto, entre otros aspectos, expuso:

“...En consecuencia, esta última fecha (22 de noviembre de 1993) en la cual se dictó el auto de procesamiento, debe tomarse en como punto de partida para efectuarse el cómputo nuevamente, observándose, que hasta hoy, 16 de junio de 2009, han transcurrido quince (15) años, seis (06) meses y veinticuatro (24 días), tiempo este que supera el lapso de 15 años previsto legalmente (artículo 108, numeral 1 del Código Penal), en el ordenamiento jurídico venezolano, para que opere la prescripción de la acción penal para perseguir el delito de Homicidio Calificado...”

Esgrimió la ciudadana Fiscal ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la audiencia efectuada, que estaban cumplidos los requisitos de ley para

proceder con la extradición del ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal, agregando, que según su óptica, la acción penal, correspondiente al delito que se le imputa al ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal, se encuentra prescrita, de acuerdo a la legislación penal venezolana.

Por su parte, la defensa del ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal indicó, que no estaban llenos los requisitos de ley, por cuanto no existe la doble incriminación, condición necesaria para la procedencia de la extradición, señalando también, que la acción penal se encuentra prescrita, de acuerdo a la aplicación del Código Penal venezolano.

La propia defensa del ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal, el 31 de julio de 2009, consignó escrito, ratificando sus alegatos y pidiendo se dicte la decisión que corresponda.

III

DEL PROCEDIMIENTO

La institución de la extradición, está asentada en el artículo 6 del Código Penal, estableciéndose su régimen sustantivo.

De igual forma, la extradición, a los fines adjetivos, está concentrada en el título VI, libro tercero del Código Orgánico Procesal Penal.

Es así, como la solicitud de extradición pasiva, está regulada desde el artículo 395 hasta el artículo 399 del antes nombrado código.

El artículo 395 del Código Orgánico Procesal Penal, es del tenor siguiente:

“Extradición pasiva. Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se halle en territorio de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida”.

Por su parte, el artículo 396 del código adjetivo, dispone que el Tribunal de Control podrá, a solicitud del Ministerio Público, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, ordenar la aprehensión de un ciudadano requerido por un gobierno extranjero.

Luego de ello, deberá remitirlo al Tribunal Supremo de Justicia, que indicará el término perentorio para la presentación de la documentación requerida, que no podrá ser mayor a sesenta días.

El procedimiento vigente para resolver la solicitud de extradición pasiva, ordena en el artículo 396 del Código Orgánico Procesal Penal, que la máxima instancia convoque a una audiencia con la asistencia de las partes, a los fines de oír sus alegatos.

En este contexto, al existir una Notificación Roja sobre el ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal, fue detenido por autoridades policiales venezolanas, y el 25 de abril de 2009, la Fiscal Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, lo presentó ante el Juzgado Décimo Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

El Juzgado Décimo Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la petición fiscal, ordenando su aprehensión y remitiendo los autos a esta Sala.

Es válida la oportunidad para recordar, el criterio sostenido de forma constante por la Sala de Casación Penal, en los casos de extradición pasiva, que consiste en: *“...Solicitada por el país requirente la detención con fines de extradición del ciudadano requerido, es imprescindible que se materialice esa detención para que se realice la audiencia a la que se refiere el artículo 399 del Código Orgánico Procesal Penal...”*. (Sentencia N° 411 del 3 de octubre de 2006).

IV

PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD

De conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartes primero, segundo y tercero del Código Penal, es necesario resaltar, que es vinculante para la procedencia de tal solicitud, que el delito que se le imputa al ciudadano Ignacio Echeverría Landaeta no sea político ni conexo con éste, que esté sancionado por las legislaciones de los países involucrados en el proceso, determinando la doble incriminación, así como también, debe observarse, que se establezca como supuesto de procedencia en el tratado de extradición suscrito por ambos países, que el delito no tenga asignada en el país requirente la pena de muerte, pena perpetua, o pena mayor a los treinta años, y que la acción o la pena, según el caso, no esté prescrita.

Ahora bien, en los folios 89 y 90 del expediente, se aprecia el Acta del Caso emitida por el ciudadano Fernando Andreu Merelles, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción N° 4 de la Audiencia Nacional del Reino de España, referida al asunto que concierne al ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal, en cuyo texto expone:

“...Que en este Juzgado a mi cargo se sigue procedimiento penal, con el número 102/1.993, contra D. IGNACIO ECHEVERRÍA LANDAZÁBAL, (quien cambió legalmente sus apellidos en el registro Civil de Bilbao el 5 de diciembre de 1.991 por el de IÑAKI LANDAZABAL ECHEVERRÍA, D.N.I. 16.027.688 nacido el 14/08/1957 en Bilbao (Vizcaya), a quien se le acusa de la comisión de un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa. Los hechos que se imputan en la presente causa a IÑAKI LANDAZABAL ECHEVERRÍA consisten en que el día 4 de abril de 1.981, formando parte de la organización terrorista E. T. A., y junto con otras tres personas también miembros de dicha organización, se dirigió a los locales del periódico ‘La Gaceta del Norte’ de la localidad de Bilbao, en donde trabaja D. Gerardo HUEZO FERNANDEZ, con el fin de acabar con su vida. Víctor Tejedor Bilbao y otro individuo entran en el local, mientras que los otros dos integrantes del grupo esperan fuera, dando protección. Una vez en el interior,

y localizada la víctima, comienzan a disparar contra el mismo, quien no obstante consigue huir sin ser alcanzado por los disparos. Tras ello, los autores del atentado salen corriendo del lugar, huyendo, escondiendo las armas utilizadas...Se hace constar expresamente que, dado que la última actuación procesal realizada contra IÑAKI LANDAZABAL ECHEVERRÍA se produjo en el año 1.993, no se cumplido el plazo de prescripción que, para este tipo de delitos establece la legislación española, el cual es de VEINTE AÑOS. En Madrid a treinta de Abril de dos mil nueve...(sic)”.

Del referido documento se desprende, que el ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal, no es venezolano, su nacionalidad es española, tal y como también se desprende de las actas del expediente, y en especial, del acta levantada con ocasión a la audiencia efectuada el 25 de abril de 2009, ante el Juzgado Décimo Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, presente en los folios números 16 al 21.

Se aprecia además, que el delito por el cual se persigue al ciudadano Ignacio (Iñaki) Echeverría Landazábal, es el denominado asesinato en grado de tentativa.

Bueno es indicar, que según el Diccionario de la Real Lengua Española, “asesinar”, es matar a alguien con premeditación y alevosía; concepto que se corresponde, con lo aceptado de forma constante y acostumbrada por la doctrina patria, que define al asesinato, como un homicidio intencional de más alto repudio social, en el cual concurre como calificante, la alevosía. Teniéndose asimismo, a la alevosía, como la actuación de aquel inculpado, que obra a traición o sobre seguro de cometer el delito.

Ahora bien, para el momento en que ocurrieron los hechos en los que presuntamente está involucrado el citado ciudadano: 4 de abril de 1981, estaba vigente en Venezuela, el Código Penal publicado en la Gaceta Oficial N° 915 del 30 de junio de 1964, que contenía en su artículo 408 (numeral 1), el delito de homicidio ejecutado con alevosía, disposición

que en el actual texto sustantivo persiste, y está enmarcada en el numeral 1 del artículo 406, respectivamente.

Así mismo, el numeral 1 del artículo 408 del Código Penal del 30 de junio de 1964, estableció para ese delito, la pena de 15 a 25 años de presidio, mientras que el actual delito, indicado en el numeral 1 del artículo 406, establece una pena de 15 a 20 años de prisión.

El Código Penal del Reino de España, establece en el numeral 1 del artículo 139, que será castigado como reo de asesinato con pena de prisión de 15 a 20 años, aquella persona que diere muerte a otra, concurriendo la alevosía como circunstancia calificante.

El ámbito punible del delito imperfecto, distinguido en este caso en la tentativa de este hecho delictivo, según las actas acompañadas, también resulta estar regulado en el Código Penal venezolano del 30 de junio de 1964, como se aprecia en su artículo 80; sucediendo lo mismo, en el artículo 16 del Código Penal del Reino de España, encontrándose prevista, en ambos códigos sustantivos.

Por tanto, el ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal es un ciudadano español, presuntamente involucrado en la tentativa del delito común de asesinato, que no constituye un delito político, ni conexo con este.

Debe agregarse, que este hecho punible, se encuentra previsto en la legislación sustantiva española como en el Código Penal venezolano, como se ha notado, determinándose la doble incriminación; no acarreando pena de muerte en España, pena perpetua ni mayor a los treinta años; sino que amerita por el contrario, una pena que oscila entre los 15 y 20 años de prisión.

Por otra parte, existe un Tratado de Extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, publicado en la Gaceta Oficial N° 34.476 del 28 de mayo de 1990, conforme al cual, es obligatorio realizar ciertas apreciaciones previas:

Este instrumento, está enmarcado dentro de los postulados de la Escuela Positivista, por cuanto es el producto de la voluntad colectiva de ambas naciones, por cooperar conjuntamente, en un fin determinado, que en este caso, resulta ser: el combate del hecho delictivo.

El análisis precedente, permite recordar, que el maestro Antonio Linares, llama al tratado, cual instrumento jurídico de corte internacional, como un documento donde se consignan disposiciones libremente pactadas entre dos o más sujetos de Derecho Internacional, en procura de crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos.

Pero esto no tendría sentido, de no ser, por la Convención de Viena, que ordena interpretar un tratado de *buena fe*, conforme al sentido racional que haya que atribuírsele a los términos del Tratado, teniendo en cuenta su objeto y fin.

En efecto, dicho tratado de extradición, establece en le literal B del artículo 10, lo siguiente:

“No se concederá Extradición: (...)

B) cuando de acuerdo a la ley de alguna de las partes se hubiere extinguido la pena o la acción penal correspondiente al hecho por el cual se solicita la extradición...”.

Estima advertir la Sala, que la prescripción de la acción penal, es la extinción del “*ius puniendi*” que ostenta cada Estado, el cual confiere la autoridad legítima para castigar al infractor de la ley, cuya conducta está tipificada a través del derecho sustantivo, con carácter de hecho delictivo.

Este criterio, ha sido sostenido constantemente, como se percibe a continuación: “*La prescripción es una limitación al Ius Puniendi del Estado para la persecución y castigo de los delitos, lo cual ocurre por el transcurso del tiempo y la inacción de los órganos jurisdiccionales...*”. (Sentencia N° 575 del 19 de diciembre de 2006).

En atención a lo antes expuesto, la Sala pasa a constatar, conforme a criterio de buena fe, si ha operado o no la prescripción de la acción penal.

Del Acta del Caso, emitida el 30 de abril de 2009, por el Juzgado Central de Instrucción N° 4, de la Audiencia Nacional de España, que cursa en los folios 181 y 182 del expediente, se apreció, que: “...*Se hace constar expresamente que, dado que la última actuación procesal realizada contra IÑAKI LANDAZABAL ECHEVERRÍA se produjo en el año 1.993, no se cumplido el plazo de prescripción que, para este tipo de delitos establece la legislación española, el cual es de veinte años...(sic)*”.

De forma tal, que la acción judicial del delito por el cual es requerido el ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal, no se encuentra prescrita de acuerdo a la legislación penal aplicable en el Reino de España, que es el país que lo requiere para su procesamiento.

Por su parte, en lo que respecta a la República Bolivariana de Venezuela, que es el país requerido, obligante es indicar que la prescripción es de orden público, y que el hecho por el cual está siendo perseguido el ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal, ocurrió el 4 de abril de 1981, siendo obligatorio revisar las disposiciones legales venezolanas que regulan la prescripción de la acción penal.

Con base en esto, pertinente es referir, que el Código Penal, del 30 de junio de 1964, en sus artículos 108, 109 y 110, regula los presupuestos para calcular e interrumpir la prescripción de la acción penal.

El numeral 1 del artículo 108 del Código Penal establece, que la prescripción de la acción penal es de 15 años, para aquellos delitos que merecieren pena de prisión que exceda de 10 años, como es el caso concerniente a la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, que contrae una pena entre 15 y 20 años, (siendo su

término medio: 17 años y 6 meses, de acuerdo al artículo 37 sustantivo), encontrándose entonces en este supuesto normativo.

Para evaluar si ha operado la prescripción ordinaria de la acción penal, se debe observar el artículo 109 del mismo código sustantivo, que indica:

“Comenzará la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho...”.

La forma de interrumpir la prescripción de la acción penal, está contenida en el artículo 110 del Código Penal, detallando lo siguiente:

“Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el reo, si este se fugare.

Interrumpirán también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria y las diligencias procesales que les sigan; pero si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal.

Si establece la ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si en el término de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción, no se dictare sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal.

La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción.

La interrupción de la prescripción surte efectos para todos los que han concurrido al hecho punible, aun cuando los actos que interrumpen la prescripción no se refieran sino a uno”.

Como se ha apreciado, los hechos ocurrieron el 4 de abril de 1981, en Bilbao, España; siendo que el Auto de Procesamiento Judicial, fue emitido el 22 de noviembre de 1993, por el Juzgado Central de Instrucción N° 4 de la Audiencia Nacional del Reino de España, conforme el cual, el Juzgado de Instrucción N° 4 de la Audiencia Nacional del Reino de España, acordó otorgarle al ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal, el carácter de procesado.

Desde el momento de los hechos hasta la expedición del Auto de Procesamiento Judicial, transcurrió un tiempo de 12 años, 7 meses y 18 días, no superando entonces, el lapso de 15 años, para que opere la prescripción ordinaria.

Ahora bien, indica el artículo 109 sustantivo, que el transcurso del lapso de prescripción, puede ser interrumpido, como sucedió en este caso, con la expedición del Auto de Procesamiento, que equivale, de acuerdo al Código Penal vigente para el momento de los hechos, al auto de detención relacionado en el artículo 109 comentado.

En efecto, este acto interruptivo de la prescripción, constituye a la vez, como lo afirmó la autoridad judicial española competente, el último acto procesal en la causa que involucra al ciudadano Ignacio Echeverría Landazábal; coligiéndose entonces, que a partir de ese momento procesal, se debe comenzar a contar nuevamente el lapso de 15 años, exigido en el artículo 108 del Código Penal.

En tal sentido, desde el 22 de noviembre de 1993 hasta el presente, han transcurrido más de 15 años y 7 meses, habiendo transcurrido un tiempo superior al de la prescripción indicada en el numeral 1 del artículo 108: que es de 15 años, por lo que se debe concluir, que ha operado por lo que respecta a la República Bolivariana de Venezuela, la prescripción ordinaria de la acción penal, habiéndose extinguido por ende, la acción penal respectiva.

Tal situación, regulada en el Tratado de Extradición suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, publicado en la Gaceta Oficial N° 34.476 del 28 de mayo de 1990, impide proceder con la extradición, al faltar este requisito expresamente convenido entre los Estados partes.

La Sala observa además, que igualmente, la ciudadana Fiscal General de la República, de acuerdo al informe presentado, reconoce que la acción penal correspondiente, se encuentra prescrita, con base a la legislación venezolana.

En consecuencia, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declara **IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN**, del ciudadano de nacionalidad española **IGNACIO ECHEVERRÍA LANDAZÁBAL**, requerido por el Reino de España, y ordena su inmediata libertad. Así se decide.

VI

DECISIÓN

Por las razones antes señaladas, esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, sobre la base de las disposiciones constitucionales, el Tratado de Extradición suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España, los fundamentos legales aplicables, en conexión con los alegatos expuestos por la defensa del citado ciudadano y por la ciudadana Fiscal General de la República, **DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN** del ciudadano **IGNACIO ECHEVERRÍA LANDAZÁBAL**, de nacionalidad española, requerido por el Reino de España a la República Bolivariana de Venezuela. Se **ORDENA su libertad inmediata**. Expídase la correspondiente boleta de excarcelación. Remítase copia certificada de la decisión y de las actuaciones que conforman el expediente al Ministerio Para el Poder

Popular de Relaciones Interiores y Justicia, al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, y a la Fiscal General de la República.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los (4) del mes de agosto del año dos mil nueve. Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

Publíquese, regístrese y archívese el expediente. Ofíciase lo conducente.

El Magistrado Presidente,

ELADIO RAMÓN APONTE APONTE
(Ponente)

La Magistrada Vicepresidente,

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

Los Magistrados,

HÉCTOR CORONADO FLORES

BLANCA ROSA MÁRMOL de LEÓN

MIRIAM MORANDY MIJARES

La Secretaria,

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

ERAA/
Exp. N°AA30-P-2009-000167.

Las Magistradas doctoras Deyanira Nieves Bastidas y Miriam del Valle Morandy Mijares no firmaron por motivo justificado.

La Secretaria

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ



LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León.

El día dos de agosto de 2002, se recibió en Secretaría de esta Sala Penal, el oficio No. 2079 de fecha 29 de julio de 2002, suscrito por el Director General del Ministerio de Interior y Justicia, se remitió a esta Sala: *"copia del oficio No. 2071 de fecha 10 de julio de 2002, suscrito por el Vice-Ministro de Relaciones Exteriores, Arévalo Méndez Romero, y de la Nota Original No. 001495 con su respectiva documentación debidamente certificada de la exposición de los hechos y solicitud de aplicación de la medida cautelar emitidos por el Tribunal de Catania, en idiomas Italiano y Castellano, procedente de la Embajada de Italia acreditada ante el Gobierno Nacional, relacionada con la solicitud de extradición del ciudadano Italiano **SALVATORE MAZZEO**."*

En fecha 07 de marzo de 2001, se acordó remitir al Fiscal General de la República copia certificada del expediente, a los fines previstos en el artículo 108 numeral 16 del Código Orgánico Procesal Penal. En la misma fecha se solicitó tanto al Ministro de Interior y Justicia como al Director del Internado Judicial de Los Teques, información de la detención o no del requerido, a los fines de sustanciar el procedimiento de extradición.

En fecha 08 de agosto de 2002, se dio cuenta en Sala y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se le asignó la ponencia a la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León.

En fecha 04 de Septiembre de 2002, se recibió respuesta del Director General de la Dirección de custodia del Ministerio de Interior y Justicia, manifestando que el ciudadano de nacionalidad Italiana SALVATORE MAZZEO, se encuentra recluido en el Internado Judicial de Los Teques y anexa copia del formulario referente a la situación jurídica del mismo, elaborada en

dicho Internado el 26 de agosto de 2002, en donde se verifica que el requerido fue detenido el 22 de febrero de 2002 e ingresó al penal al día siguiente, para cumplir la pena impuesta de 10 años de Prisión por el delito de Tráfico de Droga y que se encuentra a cargo del Tribunal Primero de Ejecución de Maiquetía, quien según Boleta No. 322-02 del 03 de mayo del 2002, autorizó su traslado para el Internado de Lagunillas Estado Mérida.

El 05 de noviembre de 2002 se realizó la audiencia oral y pública para oír los alegatos de las partes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 402 del Código Orgánico Procesal Penal.

Cumplidos los demás trámites procedimentales esta Sala pasa a decidir sobre la procedencia o no de la presente solicitud de extradición y al respecto observa que:

De los recaudos recibidos en esta Sala Penal, se verifica la solicitud en extradición, por parte de la Embajada de Italia, del ciudadano italiano SALVATORE MAZZEO, nacido en Barcellona Pozzo di Gotto el 16 de junio de 1942, a quien le fue dictado auto de prisión provisional, conjuntamente con un grupo de personas a quienes se les acusa de asociarse para importar y transportar a países extranjeros, a fin de venderla, sustancia estupefaciente de tipo cocaína, en cantidades aún no especificadas. Sin embargo, señalan los recaudos que en relación a Salvatore Mazzeo y Salvatore Sorace, quienes están asociados al mismo consorcio criminal, con fundamento en las investigaciones realizadas y en particular en las escuchas telefónicas, el día 5 de marzo de 2002, llegó informe de la Patrulla Móvil de la Jefatura de Catania – Sección antidrogas, indicando que fueron detenidos en el aeropuerto de Maiquetía en Caracas – Venezuela, por haber ingerido y transportado, el primero, una cantidad total de 600 gramos de Cocaína y el segundo, una cantidad total de 350 gramos de Cocaína.

Ahora bien, debemos recordar que respecto al procedimiento de extradición, el Estado venezolano obra con un alto sentido de responsabilidad, por una parte acepta la extradición como una obligación moral conforme al Derecho Internacional, pero se reserva la apreciación para concederla o negarla, tomando en cuenta si en el caso concreto se contrarían los principios de nuestra legislación nacional o no estuviese conforme con la razón y la justicia.

En tal sentido, los artículos 6 del Código Penal y 391 al 399 del Código Orgánico Procesal Penal, recogen los principios básicos que en materia de extradición establece el derecho positivo venezolano.

Conforme al artículo 6 del Código Penal, la extradición de un extranjero no procede:

- a) por delitos políticos y sus conexos.
- b) Por hechos que en Venezuela no estén calificados como delitos.
- c) Cuando la pena asignada al delito por la legislación del país requirente, sea de muerte o perpetua.

Y el artículo 391 del Código Orgánico Procesal Penal establece que “la extradición se rige por las normas de este título, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República”.

La presente solicitud de extradición pasiva, es presentada por la Embajada de Italia de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Extradición y de Asistencia Judicial en materia penal, suscrito en Caracas, el 23 de agosto de 1930, dicho tratado en su artículo 6 considera que: *“Si la persona cuya extradición se pide estuviere en el caso de ser sometida a procedimiento penal o estuviere ya detenida, por otro delito cometido en el Estado en que se encuentre, su entrega puede diferirse hasta que el procedimiento haya terminado, y, en caso de condena, hasta el completo cumplimiento de la pena.”*

Ahora bien, al analizar la documentación enviada por el Gobierno requirente, se evidencia que los hechos que se imputan al ciudadano Italiano SALVATORE MAZZEO, son ilícitos tanto en el país requirente como en el requerido, pues se trata de uno de los delitos conocido internacionalmente como TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES, delito no político ni conexo con éste, previsto y sancionado en nuestra legislación, cuya acción penal no se encuentra prescrita y que ni en el país requirente ni en el nuestro acarrea pena de muerte ni mayor de 30 años, lo que podría conducirnos a declarar procedente la presente solicitud de extradición pasiva.

No obstante lo anterior, esta Sala considera que la presente solicitud de extradición pasiva debe ser declarada improcedente, en virtud de lo dispuesto en el tratado suscrito entre Italia y

Venezuela, con especial respeto al principio penal “*ne bis in idem*”, toda vez que el ciudadano italiano solicitado, tal y como consta en el expediente, ha sido procesado y condenado en nuestro país por la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, y se encuentra en la actualidad cumpliendo la pena de 10 años de prisión, impuesta por los tribunales venezolanos, bajo la supervisión del Tribunal de Ejecución Primero de Maiquetía-Estado Vargas, con fecha de cumplimiento de pena para el 19 de febrero de 2012.

En cuanto a este último punto, es de hacer notar que si una vez cumplida la pena impuesta al ciudadano italiano SALVATORE MAZZEO, el gobierno de la República de Italia interpusiera una nueva solicitud de extradición contra este ciudadano italiano, la misma no procederá por los hechos que ha sido condenado en nuestro país sino por otros distintos o nuevos.

Es de observar que, en fecha 01 de octubre de 2002, se recibió en la Secretaría de esta Sala, escrito de fecha 30 de septiembre de este mismo año, mediante el cual el ciudadano Fiscal General de la República, emite su opinión en cuanto a la presente solicitud de extradición pasiva, concluyendo que la misma “se encuentra ajustada a derecho, debiendo ser declarada con lugar, siempre y cuando se constate la detención del referido ciudadano”; al respecto, debemos señalar que se evidencia de dicho escrito que no fueron considerados ciertos recaudos que constan en el expediente, relacionados con la detención, juzgamiento y condena del ciudadano italiano solicitado, los cuales se agregaron posteriormente al envío realizado a la Fiscalía General de la República, cuyo contenido ha resultado fundamental para la resolución de la presente solicitud.

En tal sentido, esta Sala declara improcedente la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de la República Italiana, del ciudadano SALVATORE MAZZEO, identificado en autos. Así se decide.

Una vez decidido lo anterior, esta Sala considera necesario manifestar, que observa con preocupación la situación planteada por las partes en la audiencia oral y pública celebrada el pasado 5 de noviembre de 2002, toda vez que a pesar de lo legalmente establecido en los tratados y en las normas internas de cada país, resulta preocupante que en casos como el presente, no se

pueda con la anuencia de todas las partes, inclusive de los solicitados en extradición, proceder al otorgamiento de la misma, a los fines del cumplimiento de la condena impuesta, como es el caso de autos.

Debería ordenarse, previo el estudio de cada caso en concreto, el traslado de los ciudadanos extranjeros a sus países de origen, una vez que han sido procesados y condenados por nuestro sistema judicial penal, en virtud que situaciones como la notable diferencia entre la política criminal de los países y la posibilidad de cumplir con los fines de la pena, tales como la reinserción del condenado a la sociedad y la cercanía con los familiares, que acelera la recuperación de los valores en el individuo, sin dejar de mencionar la economía que representa para el país no tener que ocuparse también del recluso extranjero, a los fines del cumplimiento de la condena.

DECISION

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, **DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN** del ciudadano italiano **SALVATORE MAZZEO**, quien se encuentra detenido en la cárcel de Lagunillas - Estado Mérida a cargo del Tribunal 1º de Ejecución de Maiquetía – Estado Vargas. Notifíquese a las partes de esta decisión.

Publíquese, regístrese y ofíciase lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los VEINTINUEVE días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil dos. Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

El presidente de la Sala,
Alejandro Angulo Fontiveros

El Vicepresidente,
Rafael Pérez Perdomo

La Magistrada Ponente,
Blanca Rosa Mármol de León

La Secretaria,
Linda Monroy de Díaz

BRMdL/rder.
E EXP. No. **02-0325**

Colombia autoriza nueve extradiciones a EE.UU., España y Venezuela

Efe

martes, 06 de abril de 2010, 22:09



Colombia autoriza nueve extradiciones a EE.UU., España y Venezuela **Colombia autoriza nueve extradiciones a EE.UU., España y Venezuela**

Bogotá.- Colombia autorizó hoy la extradición de nueve personas, entre ellas ocho nacionales y un español, a Estados Unidos, España y Venezuela, reclamadas por distintos delitos que van desde lavado de activos y narcotráfico hasta homicidio y secuestro, informó el Gobierno nacional.

En el grupo se encuentra Margarita Pabón, requerida por lavado de activos por un tribunal de Nueva York.

Pabón fue asesora jurídica de la pirámide financiera DMG que tomaba las iniciales de su cerebro, David Murcia Guzmán, también extraditado a EE.UU.

Asimismo, el Ejecutivo aprobó la extradición de María Ramy Mary Ducuara de Saiz, reclamada por narcotráfico por una corte del estado de Florida, y de Luis Francisco Uribe Cuéllar, solicitado por homicidio e intento de homicidio en Nueva York y por hurto con arma peligrosa en Baltimore, Maryland.

También se aprobó el traslado de Jader Alberto Gómez Giraldo, pedido por una corte de Nueva York por lavado de dinero y el de Hermes Serrano Vargas, acusado de narcotráfico en esa misma ciudad.

A Florida y acusado de narcotráfico irá Leonel González Iguarán.

Por otra parte, el Gobierno autorizó la extradición del español Luis Alfonso Felgueres Cordera a su país de origen "para que cumpla la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Asturias por el delito continuado de estafa", según fuentes del Ejecutivo.

De la misma manera, será enviado a España el colombiano Jairo Leal Aroca a petición de la Audiencia Provincial de Toledo, por homicidio, detención ilegal y delitos contra la salud pública.

Por último, fue aprobada la extradición a Venezuela de Carlos Iván Atehortúa Álvarez o Albeiro Alonso Atehortúa García, reclamado por un tribunal del estado de Bolívar por secuestro, homicidio calificado, robo agravado, agavillamiento (asociación para delinquir) y privación de la libertad.

Desde el 7 de agosto de 2002 el Gobierno del presidente Álvaro Uribe ha extraditado a unas 1.200 personas, principalmente a Estados Unidos, reclamadas por distintos delitos, especialmente relacionados con narcotráfico.



Fiscalía venezolana pedirá extradición de ex presidente Pérez

AP

CARACAS — La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció que el próximo lunes solicitará la extradición del ex presidente Carlos Andrés Pérez para procesarlo por las protestas callejeras de febrero de 1989, conocidas como el "Caracazo", en las que murieron varios centenares de personas.

Pérez, quien vive en Estados Unidos desde hace unos diez años, tiene pendiente en el país dos juicios por enriquecimiento ilícito y por los violentos disturbios callejeros de 1989.

A un día de cumplirse un nuevo aniversario del "Caracazo", Ortega Díaz anunció en un programa de la radio estatal que el primero de marzo acudirá a un tribunal capitalino que lleva el caso del ex mandatario, de 87 años, para formalizar la petición de extradición, según reseñó el Ministerio Público en comunicado.

La fiscal explicó que el juzgado capitalino deberá pasar la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia que decidirá si aprueba o no el requerimiento.

De aprobarse la petición, el máximo tribunal deberá remitir la decisión al Ministerio de

Relaciones Exteriores que se encargará de tramitar la extradición vía diplomática.

A pesar de que desde hace tres años se había anunciado la medida de extradición contra Pérez, las autoridades no habían formalizado la solicitud debido a que se estaba revisando si Venezuela tenía tratado de extradición en el país donde se encuentra Pérez, según indicó Ortega Díaz.

"La única persona que puede aportar datos importantes para la investigación, en su condición de Jefe de Estado para la época, es él. Es una de la personas presuntamente involucradas por ser Jefe de Gobierno", dijo la fiscal al justificar el proceso contra el ex gobernante.

El ex mandatario se encuentra resentido de salud debido a un accidente cerebro vascular que sufrió en octubre del 2003, según han informado miembros del partido local Acción Democrática donde Pérez militó por varias décadas.

El Ministerio Público informó en septiembre del año pasado que había solicitado a Interpol la captura de Pérez para procesarlo por los hechos de 1989.

La Fiscalía imputó en julio del 2009 al general retirado Italo del Valle Aliegro, quien era el ministro de la Defensa para el momento en que ocurrió el "Caracazo". Por ese caso están siendo procesados también otros funcionarios militares y policiales de esa época.

Ortega Díaz dijo que la próxima semana el Ministerio Público presentará el "acto conclusivo" contra los imputados por el Caracazo.

Las autoridades iniciaron el año pasado una serie de exhumaciones de las personas que murieron en las protestas de 1989 en medio de las críticas de algunos de los familiares que exigen la presencia de expertos internacionales para el estudio de los restos.

La organización humanitaria Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 (Cofavic) también ha cuestionado las exhumaciones y ha exigido la

presencia de expertos internacionales alegando que duda de la imparcialidad de las autoridades locales.

En años recientes cambió el curso de las investigaciones, estancadas por más de una década, al parecer por instrucciones del presidente Hugo Chávez, quien en reiteradas ocasiones ha descrito el "Caracazo" como una matanza.

Chávez, un ex militar que encabezó un fallido golpe en 1992, considera esa represión de las protestas como uno de los motivos de su rebelión ante el entonces presidente Pérez.

Pérez fue destituido de su cargo en mayo de 1993 y procesado por corrupción.



Aprueba España extradición de ex militar

Agencias | 09-04-2010 | 15:24 | Internacional

Madrid— El gobierno de España aprobó hoy la extradición a Argentina del ex militar Julio Alberto Poch, detenido el año pasado y acusado de delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar argentina (1976-1983).

En su reunión semanal, el Consejo de Ministros del gobierno español autorizó la entrega a las autoridades de la nación sudamericana del ex piloto argentino que tiene cuatro causas judiciales en su país por participación en los llamados "vuelos de la muerte".

Poch, quien en la actualidad tiene la nacionalidad holandesa y trabaja como piloto en la aerolínea holandesa Transavia, fue detenido el 22 de septiembre pasado en el aeropuerto de Manises, Valencia, por la policía española, durante una escala entre Valencia y Ámsterdam.

El 7 de octubre pasado se recibió por vía diplomática la solicitud de

extradición cursada por la embajada de Argentina, ya que Poch es reclamado por la justicia argentina en relación con cuatro procesos penales en los que se investigan hechos entre los años de 1976 a 1983.

El Consejo de Ministros acordó la continuación del procedimiento en vía judicial el 30 de octubre de 2009 y la Audiencia Nacional española dictó un auto el 15 de enero de 2010 en el que consideró procedente la extradición.

Las condiciones que se piden son las correspondientes garantías en relación con la no imposición de la cadena perpetua y, recabadas estas garantías por el Ministerio de Justicia y consideradas suficientes por la Audiencia, se procede a la entrega.

Las autoridades argentinas ya habían solicitado a Holanda, a finales de 2008, la extradición de Poch, tras recoger en ese país testimonios que le involucraban en "los vuelos de la muerte" cometidos durante la dictadura militar.

Asimismo, por su participación en operaciones de la Escuela Superior de Maquinaria de la Armada (ESMA) , centro clandestino de detención y torturas durante ese periodo encabezado por el general Rafael Videla.

Entre esos testimonios figuran las declaraciones de otro piloto de la compañía Transavia, que afirmó que el mismo Poch le contó cómo se arrojaba a los opositores al régimen argentino desde los aviones, además de justificar ese método de exterminio.



Aprobada extradición de Chupeta

Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta', será extraditado a Estados Unidos y enfrentará cargos por asesinato, narcotráfico y asociación ilícita. En la foto, dos de sus múltiples apariencias.

Judicial | 11 Sep 2008 - 5:27 pm

Marcos Orozco Wilches, extraditado por el gobierno venezolano



Marcos Orozco Wilches, presunto narcotraficante capturado en territorio venezolano

GLOSARIO DE TERMINOS

Abducción:	Silogismo en que la premisa mayor es evidente y la menor probable, pero más creíble que la conclusión.
Consustancial:	Que es de la misma sustancia (Consustancialidad o Consustancialidad).
Erario:	Tesoro Público. Lugar donde se guarda.
Estado requerido:	Estado ante el cual se pide la extradición.
Estado requirente:	Estado que solicita la extradición.
Extradición:	Procedimiento por el que un Estado, hace entrega a otro de una persona acusada o condenada para que se cumpla la ley del Estado que la reclama.
Fáctico:	Relativo a los hechos. Basados en hechos o limitados a ellos.
Interfecto:	Persona de la cual se esta hablando. Persona que ha muerto violentamente.
Rendición:	Acción y efecto de rendir o rendirse.
Vigueta	Dic, de las cosas de grandes dimensiones.

CONCLUSIÓN

En consecuencia, en virtud de que cada país tiene total autoridad sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras, su espacio territorial, su espacio aéreo etc. Este no se encuentra obligado a entregar a las personas, cuya extradición se solicite, de allí la necesidad de existencia de los tratados internacionales, lo que permite la extradición de dichas personas. No obstante, debemos recalcar que siempre hay países excluidos de estos acuerdos, lo que hace el asunto más complicado.

Además, repetidamente en la historia se han dado casos de abducción, donde un país no le da la importancia que tiene este procedimiento, no repeta la soberanía de un país, actuando contrario a los acuerdos, convenios suscritos y leyes de aquel Estado, y simplemente detiene a la persona sin el permiso del país en donde esta se encuentra, lo que ha ocasionado grandes tensiones y conflictos. Por último, está el caso donde un país solicita a otro a un delincuente condenado a una pena determinada que no está permitida en este último lugar, y ha pasado que la petición es denegada (como en el caso del asesino del "unicornio", Ira Einhorn. O sea esto parece muy sencillo, pero puede llegar a complicarse de sobremanera.

Ahora bien; con el objeto de finalizar ésta investigación y en atención a lo antes expuesto, se pueden inferir las siguientes conclusiones:

- En los casos previstos en los Tratados vigentes con el Estado en cuyo territorio se encuentre la persona reclamada, si no existe Tratado, si la extradición es considerada procedente en aplicación de la legislación del lugar en el que se encuentre la persona cuya extradición se solicita, o si no se dan ninguno de los dos casos anteriores, la extradición dependerá de la aplicación del principio de reciprocidad y colaboración que establezcan los países implicados.
- El tema de la extradición es de gran importancia para el estudio del Derecho Internacional, y como se ha podido demostrar a lo largo de esta investigación, existe una gran cantidad de elementos relacionados con este aspecto.
- Gran parte de los países han establecido tratados por los cuales especifican los aspectos más importantes y los puntos que deben tomarse en cuenta a la hora de un proceso de extradición, siendo esto pilar fundamental para que dicha extradición sea efectiva.

- Lo establecido en la Convención Interamericana sobre Extradición, abarca todos los puntos de mayor importancia en cuanto a las extradiciones se refiere, desde los trámites de la documentación inicial, hasta la entrega final de la persona a su destino.
- La extradición, no es un proceso sencillo, ya que conlleva una serie de trámites que deben ser realizados a la perfección, a fin de lograr los objetivos deseados. Son muchos los aspectos que se involucran cuando un país reclama a un delincuente y solicita se le de la oportunidad de juzgarlo. En muchas ocasiones pasa a ser inclusive noticia internacional cuando se trata de ciertos delitos muy sonados o de casos que conmueven a la ciudadanía en general.
- Es de gran importancia conocer todos los detalles de la extradición, sobretudo para aquellas personas que desean desempeñarse en el área del Derecho Internacional, puesto que este conocimiento es una herramienta base para la solución de conflictos que día a día incrementan en todos los países involucrados o no, en este procedimiento.

BIBLIOGRAFIA

OCEANO UNO DICCIONARIO ENCICLOPEDICO, MMVII EDITORIAL OCEANO, 21-23. Barcelona – España. .2007

DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe. S.A. Madrid – España. 2007.

LECCIONES DE DERECHO PENAL. Vadell Hermanos Editores. Aveledo Grisanti Hernando. 2007. Valencia - Venezuela

DERECHO PENAL VENEZOLANO. McGraw-Hill Interamericana. Alberto Arteaga Sánchez. 2006. Caracas - Venezuela

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Reedición actualizada Enero 2008.

CODIGO ORGANINO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Gaceta Oficial N° 5.768. Extraordinario, 13 de abril de 2005.

DICCIONARIO JURIDICO VENEZOLANO. Ediciones Vitales 2000 C.A. 1991. Caracas – Venezuela.

